

# **TRABAJO FINAL DE GRADO**

## **MEMORIA**

**GRADO EN DERECHO.**

**CURSO 2019-20**

**La evanescencia de la tutela judicial efectiva**

**Tamarite de Litera y el alcance de los mínimos ideales de la ley 38/1988,  
de 28 de diciembre de Demarcación y Planta Judicial**

Autor/a: Helena Montoliu Bardají

DNI: 48054686G

Tutor/a: Dr. Jaume Ribalta Haro

Data: 1 de junio de 2020

DEFER

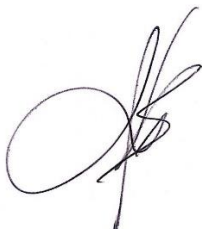
## **DECLARACIÓN DE AUTORIA Y ORIGINALIDAD**

Declaro que soy la autora de este trabajo. Su contenido es original y todas las fuentes han sido debidamente citadas sin incurrir en fraude o plagio.

En caso contrario, conozco y acepto las medidas disciplinarias o sancionadoras que correspondan de acuerdo con la normativa aplicable.

Lleida, a 1 de junio de 2020

Firma: Helena Montoliu Bardají

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by several strokes, representing the name Helena Montoliu Bardají.

## **RESUMEN**

Tamarite de Litera encontró en la ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, la herramienta para conservar la administración de justicia en él, ya que su Juzgado de Distrito sería suprimido. La finalidad de este texto normativo era la eficiencia del sistema judicial español, mediante cambios en la demarcación judicial, eliminando los Juzgados de Demarcación, pudiendo convertirse en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción o en Juzgados de Paz. La conversión en un tipo u otro de Juzgado dependía del cumplimiento de determinados requisitos de litigiosidad, población o futura expansión económica de la Comarca en cuestión, ya que, a juicio del legislador, la Administración de Justicia se encontraba obsoleta, infradotada de medios y con escasa eficacia. Para los impulsores de este proyecto, el municipio cumplía con creces los objetivos de la ley. Tamarite de Litera debía contar con un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.

## **PALABRAS CLAVE**

Juzgado de Distrito, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, Juzgado de Paz, Demarcación y Planta Judicial, Requisitos, interpretación, competencia, eliminación.

## AGRADECIMIENTOS

Tras un largo tiempo de investigación pongo fin a mi trabajo de final de grado. Este proceso se traduce en un gran aprendizaje y en el conocimiento de la historia que esconde Tamarite de Litera, mi pueblo. Me gustaría agradecer a aquellas personas e instituciones que me han prestado su ayuda.

En primer lugar, agradecer a mi tutor Dr. Jaume Ribalta Haro, por los consejos, información, refuerzo y dedicación que me ha brindado.

También quería destacar la colaboración del Ayuntamiento de Tamarite y a todo su personal, en especial a Teresa Ibañez por estar siempre dispuesta a tenderme una mano.

A los Juzgados de Paz de Baells, Baldellou y Camporrells y a sus alcaldes. Al Archivo de la Diputación Provincial de Huesca, por su atención y arrojar luz a mi investigación.

A mi madre por los recursos, ánimos y comprensión, a mi abuelo Ramón por transmitirme esa sabiduría que solo dan los años. A mi familia: Javi, Joaquina María, Susana, Lea, Carla , Gese , José María y Paula.

Y a Luis por su apoyo incondicional e incansable.

FIDEI

FIDEI

## ÍNDICE

<b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>10</b>
1.1. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN .....	10
1.2. METODOLOGÍA .....	11
1.3. PLANTEAMIENTO.....	12
<b>2. DEMARCACIÓN JUDICIAL ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA: ¿DE DÓNDE PARTÍA LA LEY DE 1988? ¿QUÉ ESTABLECIÓ?.....</b>	<b>14</b>
2.1. EVOLUCIÓN DE LA PLANTA JUDICIAL CONTEMPORÁNEA ESPAÑOLA .....	14
2.2. ELIMINACIÓN DEL JUZGADO COMARCAL DE TAMARITE DE LITERA .....	17
<b>3. UN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN TAMARITE DE LITERA</b>	<b>20</b>
3.1. LEY 38/1988, DE 28 DE DICIEMBRE DE DEMARCACIÓN Y PLANTA JUDICIAL. ....	20
3.2. PARTIDO JUDICIAL DE TAMARITE DE LITERA. FUNCIONAMIENTO, RELACIÓN JERÁRQUICA Y ELIMINACIÓN DEL JUZGADO DE DISTRITO .....	21
3.3. REQUISITOS Y CONDICIONES IMPUESTOS POR LA LEY 38/1988. POSIBILIDADES DE CUMPLIMIENTO DEL JUZGADO DE TAMARITE DE LITERA .....	24
<b>4. LUCHA DE LAS INSTITUCIONES Y CIUDADANÍA DE LA COMARCA DE LA LITERA PARA MANTENER UN JUZGADO EN ELLA.....</b>	<b>29</b>
4.1. ACTUACIONES DE LOS ALCALDES DE LA COMARCA; ELABORACIÓN DE DISTINTOS INFORMES, CARTAS A DISTINTAS INSTITUCIONES Y RESPUESTAS A CERCA DE LA VIABILIDAD DE UN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN EN TAMARITE .....	29
4.2. ANÁLISIS DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADO POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN	33
4.3. SENTENCIA PLENO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 57/1990 DE 29 DE MARZO. RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD 859, 861, 864 Y 870/1985 (ACUMULADOS) .....	39
<b>5. ACTUALIDAD JUDICIAL DE LA COMARCA DE LA LITERA. JUZGADOS DE PAZ EN LA COMARCA ESPECIAL ÉNFASIS EN TAMARITE DE LITERA.....</b>	<b>43</b>
<b>6. CONCLUSIONES.....</b>	<b>46</b>
<b>7. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA .....</b>	<b>48</b>
<b>8. FUENTES DE ARCHIVO UTILIZADAS .....</b>	<b>49</b>
<b>9. LEGISLACIÓN UTILIZADA.....</b>	<b>50</b>
<b>10. JURISPRUDENCIA UTILIZADA .....</b>	<b>51</b>
<b>11. ANEXOS DOCUMENTALES.....</b>	<b>52</b>



DEFER

## **1. INTRODUCCIÓN**

### **1.1. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN**

En este trabajo, se pretende estudiar la evolución de la administración de justicia en el municipio oscense de Tamarite de Litera, y la reivindicación por poseer un Órgano judicial en él. A lo largo del recorrido, encontramos diversas cuestiones a resolver: La interpretación del marco normativo, el cumplimiento de los requisitos impuestos poseer un Juzgado, la adecuación de organización de la justicia a derecho; la garantía de una tutela judicial efectiva y del principio de proximidad, el ámbito competencial y el concepto y rasgos de la planta judicial española.

Estas cuestiones no serán estudiadas a fondo, debido a que el objeto principal de la investigación será la demarcación judicial ya que, a mi parecer, una buena síntesis de ella puede despejar dudas de aquellos aspectos en los que no se ahonda en profundidad.

En primer lugar, es necesario saber en qué consiste el establecimiento de la planta judicial; la organización de la planta judicial implica determinar los Juzgados y Tribunales a los que se atribuye el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado (art. 117.3 CE) y ello es competencia exclusiva del Estado.

Una vez establecida la planta judicial, aparece en escena la demarcación judicial, la cual consiste en la circunscripción territorial de los órganos jurisdiccionales que previamente han quedado establecidos en la planta judicial (art. 35.1 de la LOPJ). Radicando el principal problema en las competencias otorgadas por la Constitución a las CCAA a través de los Estatutos de Autonomía, en este terreno.

En numerosas ocasiones las CCAA han denunciado la invasión de sus competencias en el terreno de la demarcación judicial, como en el caso de Aragón al no concederse el Juzgado de Primera Instancia en Tamarite de Litera. Como sabemos el art. 152.1, párrafo segundo, de la Constitución, permite que las CCAA asuman competencias en la organización de las demarcaciones judiciales, concretamente la «fijación de la delimitación de las demarcaciones judiciales» y «localización de su capitalidad». Para ser ejecutadas deben respetarse las siguientes premisas.

La fijación de la delimitación de las demarcaciones judiciales correspondiente a los Tribunales Superiores de Justicia viene determinada por la constitución en el artículo 152.1 párrafo segundo, y en el ámbito provincial, relevante para nosotros, no existe disponibilidad por parte de las CCAA, tal y como lo establece el art. 141.1 CE. Es importante recalcar que en el tan nombrado artículo 152.1 párrafo segundo la

constitución, exige la ejecución de dichas competencias en consonancia con la LOPJ, como consecuencia de ello queda un marco normativo de actuación integrado por la Constitución, LOPJ y los EEAA.

Otro aspecto importante por el lugar e importancia que han ocupado en el trabajo, son los requisitos para que un municipio gozara de un Juzgado de Primera Instancia establecidos en la Ley 38/1988 como, por ejemplo: Los Partidos Judiciales deben tener un mínimo de 50.000 habitantes y una superficie de 700 a 1000 kilómetros cuadrados. Los municipios y ciudades han evolucionado pero la ley no lo ha hecho con ellos, quedando obsoletos.

Actualmente vivimos en un tiempo de concentración de servicios y urbanización, haciéndose cada vez más notoria la desaparición e invisibilidad del mundo rural, así como de sus necesidades. La norma debería tener en cuenta los dos polos opuestos en los que tiene que actuar, y la necesidad de obtener unos resultados idénticos, cosa que es imposible, ya que en la actualidad nos encontramos con juzgados saturados o juzgados que desaparecen. El legislador debe revisar sus requisitos y modificarlos, si cree que es necesario, adaptándolos a los distintos escenarios en los que debe interceder.

## **1.2. METODOLOGÍA**

El eje vertebrador de este trabajo de fin de grado son los archivos y los documentos que se encuentran en ellos. La fase embrionaria de la investigación, se ha realizado en el archivo del Ayuntamiento de Tamarite, repleto de correspondencia enviada por parte del alcalde de este mismo municipio junto al resto de los de la Comarca, tratando de buscar respuestas a su situación o manos amigas que les ayudaran a conseguir lo que tanto anhelaban. También encontré diversos informes y estudios fundamentando la lucha por tener un Juzgado en la Comarca de la Litera.

Para poder entender el trabajo desde otra perspectiva, acudí al archivo de tres municipios de la Comarca: Baells, Baldellou y Camporrells adentrándome en las relaciones que tenían con el Juzgado de Tamarite y como trabajaban entre sí los alcaldes para conseguir el objetivo que tenían en común. En estos archivos, se encuentran documentos y correspondencia antiquísimos, los cuales han sido esenciales para ubicarme en el contexto histórico.

Por último, he recurrido al Archivo de la Diputación provincial de Huesca, en el he encontrado correspondencia, estudios e informes, no solo del caso de Tamarite de

litera, había varios municipios que se encontraban en una situación similar como es el caso de Benabarre o Sariñena. Esta visita ha contribuido enormemente a ordenar la línea temporal del trabajo y aclarar multitud de dudas.

He tratado de reproducir fielmente el contenido de la documentación utilizada, para aproximar al lector al momento histórico en el que se asienta el trabajo, y que tenga las herramientas necesarias para seguir la evolución que se pretende transmitir. Por otro lado, ha sido fundamental contar con la experiencia, ayuda y consejos de los archiveros, haciéndome mucho más fácil la tarea.

A parte de recopilar, estudiar y ubicar la información que he encontrado en los archivos, ha sido fundamental la búsqueda y análisis de la legislación y jurisprudencia para encajar todos los ejes del trabajo.

### **1.3. PLANTEAMIENTO**

Tras meses de búsqueda en varios archivos, he podido comprobar que la historia de nuestros municipios se encuentra en ellos, a pesar de ser unos grandes desconocidos. Gracias a estas grandes bibliotecas del pasado he podido reunir los datos necesarios para poder elaborar este trabajo. El cual aborda la situación en la que se encuentra la administración de justicia en Tamarite de Litera, un pequeño pueblo de Aragón, situado en la provincia de Huesca, que vio suprimidos sus Juzgados de Distrito para ser convertidos en Juzgados de Paz.

Para poder entender mejor lo sucedido, analizaremos la evolución de la Planta Judicial Española, y los motivos por los que se suprimieron los Juzgados de Distrito en el municipio aragonés. Sin embargo, las distintas instituciones municipales, comarcales y provinciales se volcaron por completo para no dejar a Tamarite con un servicio de justicia “primario”. Es por ello, que con la entrada en vigor de la ley 38/1988 de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, vieron un atisbo de luz para que su tan anhelado juzgado fuera instaurado en él.

Estudiaremos el partido Judicial de Tamarite de Litera, antes de la eliminación de sus Juzgados de Distrito y de la entrada en funcionamiento de la ley 38/1988. Las posibilidades de cumplimiento de los requisitos impuestos para poseer un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, los informes, cartas a diversas instituciones por parte de los alcaldes de la comarca de la Litera solicitando apoyo para que se materializara su petición, llegando incluso a recurrir al Tribunal Constitucional.

Analizaremos la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional número 62/1990 de 30 de marzo –RTC/1990/62– la cual abarca el recurso de inconstitucionalidad interpuestos por las Cortes de Aragón y la Diputación General de Aragón contra determinados artículos de la Ley 38/1988. El cual es resuelto de forma acumulada junto a otro recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, al entender el tribunal que son de la misma naturaleza.

En ambas Comunidades Autónomas –en adelante CCAA– entienden que en leyes, disposiciones o actos del estado con fuerza de Ley afectan a su propio ámbito de autonomía, provocando una lesión de sus competencias autonómicas en el ámbito de la Administración de Justicia. También se realizará un análisis de la sentencia que sentó precedente para que el Tribunal Constitucional pudiera resolver, tomándola como referencia hasta en una docena de ocasiones.

En el final, llegamos a la situación actual, la cual puede extrapolarse a una gran parte de la geografía española. A parte de mostrar el efecto de las distintas normativas en esta materia, hay una invitación al lector a una reflexión sobre el servicio ciudadano que es la justicia, y si ocupa el lugar que se merece. Está claro que todos tenemos los mismos derechos, pero no todos los ciudadanos cuentan con el mismo acceso a los servicios públicos que los hacen efectivos.

## **2. DEMARCACIÓN JUDICIAL ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA: ¿DE DÓNDE PARTÍA LA LEY DE 1988? ¿QUÉ ESTABLECIÓ?**

### **2.1. EVOLUCIÓN DE LA PLANTA JUDICIAL CONTEMPORÁNEA ESPAÑOLA**

El inicio de esta investigación se asienta en observar la evolución que ha sufrido la Planta Judicial española, desde 1933 año, en el que se crearon las provincias que serán determinantes, para delimitar la organización judicial en los distintos territorios de la geografía española.

El 21 de abril de 1834, mediante Decreto se establece la división de las provincias creadas recientemente –Decreto de 30 de noviembre de 1833<sup>1</sup>– en partidos judiciales. Este decreto atribuía a los jueces de partido las funciones que venían llevando a cabo los alcaldes donde se encontraban las cabeceras de partido, en la provincia de Huesca fijaba las siguientes: Barbastro, Benabarre, Boltaña, Fraga, Huesca, Jaca y Sariñena.

Esta división podía ser alterada para que fuera más efectiva, esto puede explicar el hecho de que Tamarite de Litera a pesar de no constar como cabeza de partido, tuviera un Juzgado. Es importante destacar lo profundamente criticada que estuvo esa división territorial de partidos, tachándola de insegura y de hacer imposible llevar a cabo un pleito o interponer una denuncia, es por ello que se reformó en varias ocasiones.

En el año 1835 se aprobó el Reglamento Provisional para la Administración de Justicia, y con él aparecieron los Jueces de Primera Instancia, no es hasta casi 10 años después en 1844, cuando se dicta el Reglamento de los Jueces de Primera Instancia<sup>2</sup> otorgándoles independencia y ampliando sus funciones.

El establecimiento de la planta judicial y de los Tribunales de Partido no se produce hasta la promulgación de la Ley Provisional Orgánica del Poder Judicial de 15 de septiembre de 1870, en adelante LPOPJ, asignaba atribuciones a estos juzgados tanto en materia civil como penal.

El artículo 15 de dicha ley dibujaba la Planta Judicial de la siguiente forma:

“Los Juzgados y Tribunales, cualquiera que sea su clase, a excepción del Tribunal Supremo, tomaran su denominación de los pueblos en los que estén. Estos serán:

---

<sup>1</sup> Real Decreto de 30 de noviembre, de división provincial de España (Gaceta de Madrid núm. 154, de 3 de diciembre de 1833).

<sup>2</sup> Real Decreto de 1 de mayo de 1844 (Gaceta de Madrid núm. de 3 de mayo de 1844).

La capital del Distrito para las Audiencias.

La cabeza de partido para los Tribunales de Partido.

La cabeza de circunscripción para los Juzgados de Instrucción.

El pueblo para los Juzgados Municipales”.

Tamarite quedaba integrado dentro del Partido Judicial de Fraga, y en el constaba la atribución de un juzgado.

A modo de conclusión y para entendernos la LPSOPJ, dividía el territorio nacional en: distrito, partidos, circunscripciones y términos municipales, estructurando la Administración de justicia en: Jueces municipales en cada termino municipal, Jueces de Instrucción en cada circunscripción y Tribunales de partido en los partidos judiciales y una audiencia en cada distrito. De esta estructura se desprende la intención de que la justicia sea accesible para todos los ciudadanos, teniendo en cuenta las distancias o las posibles dificultades de testigos a la hora de comparecer en juicio.

Por Orden de 30 de septiembre de 1870, se dispuso que hasta que no se crearan de forma efectiva los Tribunales de Partido – a modo de apunte, decir que estos Tribunales finalmente no fueron creados– sus funciones serian sustituidas por los Jueces de Primera Instancia. En el año 1882 a los Jueces de Primera Instancia se les atribuyo una nueva función: la instrucción, a partir de ese momento serian denominadas como Jueces de Primera Instancia e Instrucción.

Esta misma ley, crea los Tribunales Colegiados conocidos como Audiencias de lo Criminal que actuaban únicamente en el ámbito penal. Sin embargo, la Ley de Presupuestos de 1892, amparándose en razones económicas, suprimió todas las Audiencias de lo criminal que no se encontraban situadas en las capitales de provincia.

El siguiente año, en su correspondiente Ley de Presupuestos se suprimieron por las mismas razones 87 Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, y cambió la denominación de las Audiencias de lo Criminal, por Audiencias Provinciales con competencias exclusivamente penales.

Como consecuencia de ello, Tamarite de Litera se quedó sin Juzgado de 1ª Instancia y en su lugar se instauró un Juzgado Municipal regulado por la Ley de 5 de agosto de 1907 y formado por un Juez, secretario, Fiscal y sustituto. El tribunal

municipal está formado por el Juez junto a dos adjuntos, conocía de los Juicios de Faltas en materia penal y civil –demandas de poca cuantía–, estos tribunales dejan de funcionar en el año 1923, tras peticiones populares de restablecimiento, su cese definitivo es en el año 1934.

El 19 de julio de 1944, se promulga la <sup>3</sup>Ley de Bases para la reforma de la Justicia Municipal, y con ella una reforma de la demarcación judicial, dando lugar a los Juzgados Comarcales, Municipales y de Paz. Un año más tarde se publicó la <sup>4</sup>Ley de 17 de julio de 1948 de Conflictos, la cual establecía la autorización al ministro de Justicia, para suprimir o convertir en comarcales aquellos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con escasa carga de trabajo. Dejando entre ver, que había provincias o comarcas con más juzgados que asuntos que tratar.

La abundancia de juzgados y los escasos asuntos, es solo una consecuencia de la situación en la que se encontraba nuestro país en aquel momento. España, se encontraba en un proceso de recuperación, después de superar la guerra civil en 1939, y también sufría el éxodo rural, viendo los pueblos disminuir su población y las grandes ciudades y la periferia, el efecto contrario.

Por lo tanto, la demarcación judicial debía adecuarse a esta nueva situación, tanto demográfica como económica, aunque esta adaptación tardó unos años en llegar fue un vaticinio de lo que los pequeños municipios podían esperar.

Desde aquel momento, se hicieron numerosos esfuerzos para que la justicia se adaptara a aquella situación de cambio, creando nuevos juzgados en aquellos lugares que experimentaron la expansión económica y eliminando muchos otros. Lo que sucedió en la mayoría de las provincias, fue que vieron disminuir su total de juzgados, pero contra todo pronóstico aumentaron su existencia en las capitales y en 1970 el proceso se invierte funcionando más juzgados que los que se suprimieron.

Hemos de tener presente, que en el año 1975 se produce la muerte de Francisco Franco y como consecuencia el fin de una dictadura, y el paso a una democracia, lo cual se ve reflejado en la administración de justicia. En 1977 se eliminan los Juzgados y el Tribunal de Orden Público, así como la reducción de la competencia de la jurisdicción

---

<sup>3</sup> Ley de Bases para la reforma de la Justicia Municipal, de 10 de julio de 1944 (Gaceta de Madrid) (Ref. BOE- A-1944-7025).

<sup>4</sup> Ley Conflictos Jurisdiccionales, de 17 de julio de 1948 (BOE núm.200, de 18 de julio de 1948).



militar. En 1978 entra en vigor la Constitución, y con ella el punto de partida de la organización judicial: el principio de unidad.

En 1985 se promulga la Ley Orgánica 6/1985<sup>5</sup>, de 1 de julio del Poder Judicial, constituyendo la base normativa para el cumplimiento de los fines atribuidos por la constitución al Poder Judicial. A raíz de dicha publicación se elaboró la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, a la que le dedicaremos el capítulo siguiente, por su importante incidencia en el cambio que sufrió la situación judicial de Tamarite de Litera y de muchos otros municipios.

## **2.2. ELIMINACIÓN DEL JUZGADO COMARCAL DE TAMARITE DE LITERA**

Tras la breve revisión de la evolución de planta judicial española, nos adentraremos en el transcurso de la misma en Tamarite de Litera. En el año 1974 la Dirección General de Justicia incoa el expediente para la posible eliminación del Juzgado Comarcal de Tamarite de litera, basándose en la Ley de 19 de Julio de 1944<sup>6</sup> concretamente y en el Decreto de 8 de noviembre de ese mismo año.<sup>7</sup> Y solicita un informe que contenga toda la información posible para poder tomar una decisión.

El Ayuntamiento de Tamarite por su parte, expresa las características del municipio y razones, por las cuales no puede ser eliminado el Juzgado Comarcal, ya que cumple con todos los parámetros establecidos por la ley<sup>8</sup>;

El Juzgado comarcal está compuesto por 16 municipios, su demografía a pesar de tener dos zonas diferenciadas, mantiene su carácter comarcal y la evolución ha sido distinta en cada una de ellas, existiendo aumentos y disminuciones como consecuencia de ello la población se ha mantenido en la Comarca. En un futuro y gracias a las características de su prospera economía, se prevé que exista un aumento de población, ya que sus habitantes gozan de un nivel de vida superior a la media nacional.

Por lo que hace a su comunicación y situación, es excelente ya se encuentra cercana tanto a la capital – Huesca – como a la ciudad de Lérida – perteneciente a Cataluña –, hay que tener presente, que la mayoría de comunicaciones están dirigidas a Lérida ya que se encuentra más cerca. A parte de todo ello, Tamarite en el año 1971 por

---

<sup>5</sup> Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial (BOE núm. 157, de 02 julio de 1985).

<sup>6</sup> Ley de Bases de la Justicia Municipal de 19 de Julio de 1944.

<sup>7</sup> Véase anexo documental número 1.

<sup>8</sup> Véase anexo documental número 2.

resolución del Consejo de Ministros, fue nombrada cabecera de comarca a efectos de concentración de servicios.

Por lo tanto, la suspensión del Juzgado Comarcal sería una incongruencia, ya que por volumen de población – superior al establecido por la Base 1ª de la Ley de Bases de la Justicia Municipal– no pudiéndose quedar la Comarca sin uno de ellos. También sería contradictorio con la política del Gobierno, al nombrar a Tamarite Cabecera de Comarca. A parte de todo ello, el movimiento del juzgado no es de los más bajos de la Provincia.

Algo muy importante y favorable para el mantenimiento del Juzgado, fue el apoyo que la Diputación Provincial de Huesca le brindó, al emitir un informe desfavorable al acuerdo de incoación para la supresión del Juzgado Comarcal de Tamarite de litera, que, coincidiendo con el informe presentado por dicho Ayuntamiento, persistían las circunstancias que permitieron su creación e incluso se habían vuelto más favorables<sup>9</sup>.

Los razonamientos y suplicas para que no se suprimieran fue escuchada, y como consecuencia estos juzgados se mantuvieron. A modo de pequeño inciso, en el año 1977, se produjo un cambio en la nomenclatura, a partir de ese momento y con la entrada en vigor del Real Decreto 2104/ 1977, de 29 de julio<sup>10</sup>, los Juzgados Municipales y Comarcales pasaban a denominarse Juzgados de Distrito.

En 1981, casi 10 años después del intento de supresión del Juzgado en Tamarite, el Consejo General del Poder Judicial, volvió a fijar su objetivo en la provincia de Huesca. En publicación anual de la Memoria sobre el estado y actividades de la justicia – presentada por el mismo CGPJ – proponía la amortización de una plaza de magistrado en la Audiencia Provincial, la supresión el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Boltaña y la supresión de los Juzgados de Distrito de Sariñena y Tamarite de litera. Algo que estaba siendo totalmente contradictorio, con uno de los objetivos fundamentales de la Demarcación: El principio de aproximación de la justicia al justiciable. Pues, si bien se hubiesen tenido en cuenta las circunstancias demográficas y geográficas de la Provincia junto al principio anteriormente nombrado, no se hubiese planteado en ningún caso la eliminación de los Juzgados. El CGPJ, llegó a tal

---

<sup>9</sup> Véase anexo documental número 3.

<sup>10</sup> Real Decreto 2104/1977, de 29 de julio, por el que se aprueba el texto articulado parcial de la Ley de Bases 42/1974, de 28 de noviembre, Orgánica de la Justicia, en virtud de la autorización contenida en el Real Decreto-ley 24/1976, de 26 de noviembre. (BOE núm. 193 de 13 de agosto de 1977).

conclusión al observar que el número de asuntos atendidos en el año 1979 resultó inferior al considerado oportuno.

La DPH era contraria a esta eliminación<sup>11</sup>, llegando incluso a tachar a los criterios utilizados como difusos y oportunistas. Para evitar que la supresión se materializará, fundamento su defensa con la ayuda del Ilustre Colegio de Abogados de Huesca, manifestando lo siguiente:

- 1) En primer lugar, todas las demarcaciones deben contar con todos los servicios (judiciales, administrativos, asistenciales, sanitarios, educativos, etc.) tener menos asuntos que tratar de lo deseado era beneficioso para los usuarios, ya que se produciría una mejor asistencia y un perfeccionamiento del servicio.
- 2) En segundo lugar, los datos contemplados en la Memoria del año 1979 son poco indicativos, debido a que ese año los órganos judiciales vieron afectada su actividad normal por los procesos electorales que acontecieron. Siendo muy superior la actividad de los Juzgados de Huesca y provincia en comparación con los de estas poblaciones.
- 3) En tercer lugar, la erosión migratoria que sufre la provincia de Huesca, como consecuencia de supresiones de órganos y servicios públicos y cuyo mantenimiento hubiese contribuido a conservar el número de habitantes.
- 4) En cuarto y último lugar, todo ello puede resultar en una grave sobrecarga del sistema judicial.

El parecer de la DPH está claro, el CGPJ había utilizado una situación coyuntural, para poder hacer efectiva la tan ansiada e intentada con anterioridad supresión.

Finalmente, en el año 1984 se tomó la decisión de eliminar el Juzgado de Distrito para convertirlo en un Juzgado de Paz, pero el municipio oscense no admitió esa respuesta y consideró que la conversión tenía que ser a Juzgado de Primera Instancia e instrucción.

---

<sup>11</sup> Véase anexo documental número 4.

### 3. UN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN TAMARITE DE LITERA

#### 3.1. LEY 38/1988, DE 28 DE DICIEMBRE DE DEMARCACIÓN Y PLANTA JUDICIAL.

Como sabemos, el futuro judicial de Tamarite iba a significarse en un Juzgado de Paz, pero sus instituciones y vecinos, no creían que fuera la decisión más acertada. Con la entrada en vigor de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre de Demarcación y Planta Judicial, volvieron a intentar tener una Administración de Justicia “profesional”. En los siguientes párrafos abordaremos en que consiste, los objetivos y razón de ser de la <sup>12</sup>Ley 38/1988, de 28 de diciembre de Demarcación y Planta Judicial.

A modo de contexto; la razón de ser de la ley era modificar la estructura de la Administración de Justicia tal y como se la conocía hasta el momento, a su criterio se encontraba estancada y sus resultados eran deficitarios.

En el <sup>13</sup>Preámbulo II de dicha ley se definió la administración de justicia española como poco eficiente, distribuida de forma desigual e imperfecta, con insuficiencia de medios tanto económicos como personales. Y como consecuencia de ello de no estar a la altura de las exigencias sociales.

El objetivo primordial es redefinir los partidos judiciales de la siguiente forma: el primer escalón estará compuesto por órganos judiciales servidos por jueces de carrera, refiriéndose a los juzgados de primera instancia e Instrucción, dotando a las Comunidades Autónomas de competencia para fijar la capitalidad.

En cuanto a los partidos judiciales deben reunir los siguientes requisitos un mínimo de 50.000 habitantes y una superficie de 700 a 1000 kilómetros cuadrados. La cifra de los habitantes está relacionada con el número de habitantes que tendrá a su cargo cada juzgado, unos 25. 000 aproximadamente y si es posible que cuenten con un mínimo de dos Juzgados de Primera Instancia e instrucción, con el fin de agilizar el trabajo y aprovechar los servicios.

---

<sup>12</sup> Ley 38/1988, de 28 de diciembre de Demarcación y Planta Judicial (BOE núm.313, de 30 de diciembre de 1988).

<sup>13</sup>Ley 38/1988, de 28 de diciembre de Demarcación y Planta Judicial (BOE núm.313, de 30 de diciembre de 1988). Anexo II. *“Organización judicial estructurada más en función de la presencia que de la eficacia; distribuida con criterios geográficos imperfectos y desequilibrados e infradotada en cuanto al número de sus titulares y sus órganos decisorios, con la consiguiente insuficiencia de los medios personales y económicos puestos a su servicio e inadecuación de las normas de procedimiento por las que se rige [...] al déficit histórico de la justicia se añade el mayor grado de exigencia social de buen funcionamiento que frente a ella, y en contraste con la pasividad tradicional, conlleva la proclamación del sistema constitucional del Estado social y democrático de Derecho”*.

Se tendrá en cuenta a parte de la litigiosidad y comunicaciones las peculiaridades de la población de cada zona, por lo tanto, se debe producir una transformación de los partidos judiciales actuales, eliminando los Juzgados de Distrito con escaso volumen de trabajo y convertirlos en Juzgados de paz.

A pesar de ello, la ley deja una puerta abierta a aquellos distritos que, a pesar de no cumplir los requisitos exigidos, pero tengan unas condiciones especiales, generen un volumen importante de litigiosidad o se encuentren colindantes a municipios de población elevada.

De todas las características establecidas en el texto el pueblo de Tamarite, acogió dos como pilares fundamentales en su lucha:

- 1) La discrecionalidad otorgada por el legislador a las Comunidades Autónomas para fijar la capitalidad de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y,
- 2) La posibilidad de relajar los requisitos si se trataba de distritos con características especiales o con un volumen de litigiosidad alto.

Es importante destacar que la Comunidad Autónoma aragonesa entendía, que su Estatuto de Autonomía –<sup>14</sup>Estatuto de Autonomía de Aragón, en adelante EAA– en concordancia con la Constitución le otorgaba margen de decisión sobre las demarcaciones judiciales.

Teniendo capacidad para establecer limitaciones territoriales y localizar la capitalidad de estas, como hemos señalado anteriormente. Tal y como plasmó en su <sup>15</sup>Recurso de Inconstitucionalidad número 548/89, plasmado en la Sentencia del Pleno del Tribunal constitucional núm. 62/1990 de 30 de marzo, la cual analizaremos en profundidad posteriormente.

### **3.2. PARTIDO JUDICIAL DE TAMARITE DE LITERA. FUNCIONAMIENTO, RELACIÓN JERÁRQUICA Y ELIMINACIÓN DEL JUZGADO DE DISTRITO**

La administración de justicia de Tamarite de Litera, estaba constituida por un Juzgado de Distrito o Comarcal, ejerciendo su jurisdicción sobre los municipios siguientes:

---

<sup>14</sup> Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. (BOE núm.97, de 23 de abril de 2007).

<sup>15</sup> RTC/1990/92. Antecedentes I. Apartado 2. “[...] la Comunidad Autónoma aragonesa tiene competencia específica sobre la fijación de demarcaciones judiciales, puesto que su art. 32.1 b), así expresamente lo declara, precepto éste que arranca del art. 152.2 de la C. E. En consecuencia, es la Comunidad Autónoma, la que, de acuerdo con el Texto constitucional, ha de establecer los límites territoriales de las demarcaciones judiciales, así como localizar su capitalidad”.

Albelda, Alcampel, Almunia de San Juan, Altorricón, Binéfar, San Esteban de Litera, Tamarite de Litera, Azanuy, Baells, Baldellou, Camporrells, Castillonroy, Estada, Estadilla, Estopiñán y Peralta de Calasanz con un total de 21.562 habitantes y una superficie de 84. 010 km.<sup>16</sup>.

Los municipios que formaban parte del partido judicial de Tamarite tenían un Juzgado de Paz propio, el cual ejercía las funciones judiciales en cada uno de ellos tanto en el ámbito penal, civil, Registro civil, Expedientes de adopción, Registro de penados por faltas y delitos e incluso existía un órgano local encargado de la libertad vigilada denominado «Junta local de servicio de libertad vigilada».

La composición de estos pequeños juzgados era la siguiente: un juez, un fiscal, un Juez sustituto, un fiscal sustituto, y un secretario. El personal de estos órganos contaba con escasa formación jurídica o de ningún tipo.

En cuanto a las relaciones que mantenía con el Juzgado Comarcal de Tamarite era jerárquica<sup>17</sup>, es decir; el trabajo desempeñado por los distintos Juzgados de Paz era supervisado por el Juzgado cabeza de partido, este aparte de tener la función de que todo se desempeñara de forma correcta, también debía informar de los cambios legislativos u informar de las subvenciones otorgadas por el Ministerio de Justicia, para que pudieran seguir en funcionamiento. Los Juzgados de Paz por su parte tenían obligación de remitir el número de asuntos tramitados en los 4 trimestres del año y las liquidaciones de los impresos del Registro Civil y de Caja. O todo tipo de información solicitada por el Juzgado de Tamarite

A parte de las tareas anteriores, también llevaban otras de distinto índole como la remisión de los datos del Registro Civil la Delegación Provincial de Estadística, y también a la estadística judicial civil y penal.

Podemos observar, que cada Juzgado de Paz funcionaba como un ente independiente, normalmente el secretario del Ayuntamiento lo era también del Juzgado de Paz, soportando una carga de trabajo elevada y con pocos recursos y retribuciones. Liberando de volumen de trabajo al Juzgado de Tamarite, podemos decir que estaban a

---

<sup>16</sup> Véase anexo documental 5. Tabla 1.

<sup>17</sup> Véase anexo documental 6.

su servicio. Es decir; desde Tamarite se les otorgaban unas directrices y estos debían ejecutarlas.

Por lo que respecta al Antiguo Juzgado de Distrito de Tamarite, soportaba un volumen de trabajo entre los años 1986 y 1987 últimos años de funcionamiento, similar al de Monzón y Fraga – Ambos con Juzgados de 1ª Instancia e instrucción –, tal y como se muestra en las siguientes tablas, bajando el número de asuntos significativamente en el año 1987.

**NUMERO DE ASUNTOS JUZGADO DE DISTRITO DE  
TAMARITE DE LITERA. AÑOS 1986-1987<sup>18</sup>**

<b><u>Jurisdicción civil</u></b>	<b><u>Año 1986</u></b>	<b><u>Año 1987</u></b>
Asuntos contenciosos	58	28
Sentencias dictadas	55	16
Exhortos civiles	74	41
 <b><u>Jurisdicción penal.</u></b>	 <b><u>Año 1986</u></b>	 <b><u>Año 1987</u></b>
Asuntos contenciosos.	212	93
Sentencias dictadas.	103	41
Exhortos, cartas órdenes y suplicatorios penales.	239	115
 <b><u>Registro civil</u></b>	 <b><u>Año 1986</u></b>	 <b><u>Año 1987</u></b>
Expedientes	93	61

Las diferentes reformas legislativas en busca de una justicia que se adaptara a las exigencias de la época y en concreto la de proximidad y efectividad judicial entre muchos otros –propósitos enumerados en la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, reguladora de la demarcación y planta judicial–. Se tradujo en la eliminación de los

<sup>18</sup> Estadística relativa al número de asuntos de los años 1986 y 1987. Juzgado de Distrito de Tamarite de Litera. Archivo del Ayuntamiento de Tamarite de Litera. Signatura 787/7.

Juzgados de Distrito –ya establecido en 1985, mediante la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio– que no cumplieran con los requisitos establecidos en dicha ley y convertirlos en Juzgados de Paz y también en que las funciones que estos se limitara a las tareas de Registro civil, el cual se encuentra estructurado en tres secciones: sección primera correspondiente a los libros de registro de nacimiento, sección segunda correspondiente a los libros de registro de matrimonio y sección tercera correspondiente a los libros de registro de defunciones.

Lo cual sucedió con el Juzgado de Tamarite, no sin una larga lucha de tanto de los habitantes de su antiguo partido judicial como de las autoridades, ya que a su entender reunía las características para convertirse en Juzgado de 1ª Instancia, en el próximo apartado veremos qué razones apelaban. Se convirtió en un hecho: Tamarite pasaba a ser un Juzgado de Paz e instaurando anisado Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción en Monzón. Obligando a los habitantes de estos pueblos a desplazarse a otro municipio, el cual nunca había formado parte de su esfera judicial para obtener justicia.

*¿A caso todo ello era el camino para que la justicia fuera accesible? ¿y efectiva? ¿Fue la mejor solución a la que optaban?* Es evidente, que la administración de justicia ha de tener una actividad mínima, pero la opción de tener un Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción en Tamarite, existió y casi pudo hacerse real. Hubiese sido una buena forma de solventar la situación.

A lo largo de los distintos capítulos de este modesto trabajo de investigación iremos extrayendo conclusiones. Para ello analizaremos detenidamente, las condiciones impuestas por la ley y si el municipio los reunía.

### **3.3. REQUISITOS Y CONDICIONES IMPUESTOS POR LA LEY 38/1988.POSIBILIDADES DE CUMPLIMIENTO DEL JUZGADO DE TAMARITE DE LITERA**

Como podemos saber, Tamarite de Litera actualmente solamente posee un Juzgado de Paz, ya que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción fue instaurado en Monzón. A pesar de no ser «justo» a ojos de muchos – Instituciones, alcaldes o ciudadanos – cumplía con los requisitos para obtenerlo, es más consideraban que tanto Monzón como Tamarite debían contar cada uno de ellos con uno.



A continuación, abordaremos los requisitos establecidos para que un juzgado de Distrito se transformara en un Juzgado de Primera Instancia, dividiéndolos en aquellos estáticos y en los que dan margen a una interpretación, así como las recomendaciones;

Según la ley 38/1988 el partido judicial debe contar con los siguientes requisitos:

- 1) Una circunscripción general de un mínimo de 50.000 habitantes, el partido judicial de Tamarite contaba con 21.262 habitantes.
- 2) Superficie media de 700 a 1.000 kilómetros cuadrados, en cuanto a la superficie de Tamarite era de 84.010.

Algunas de las recomendaciones eran:

- 1) El número ideal de 25.000 habitantes por juzgado, cifra nunca alcanzada.
- 2) Un mínimo aconsejable de dos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, finalmente Monzón conto con 2 Juzgados tal y como aconsejaba la ley.

Como podemos comprobar Tamarite no reunía de forma estricta los requisitos exigidos, pero la propia Ley en su preámbulo IV exponía que en determinados casos estos requisitos podían ser más laxos debido a las siguientes causas citadas textualmente: *«Por volumen de litigiosidad, de comunicaciones y de características orográficas y comarcales, teniendo en cuenta las peculiaridades de la población de cada zona»*.

Lo que supuso un respiro, si podían demostrar que el municipio reunía unas características peculiares, o que el número de litigios no se alejaba de otros municipios que habían obtenido un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción podrían obtenerlo ellos también.

No podían pasar por alto tampoco que en el inicio del preámbulo se establece, que el objeto de la ley es realizar una redefinición de los partidos judiciales, pero teniendo en cuenta lo siguiente: *«Respetando la competencia de las Comunidades Autónomas para fijar la capitalidad»*.

Este podía ser otro as bajo la manga, es decir; si Tamarite y conseguía que la Comunidad Autónoma de Aragón, diera el visto bueno a fijar un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Tamarite y crear un partido judicial, el Poder Judicial tendría que acatarlo o al menos plantearse dicha situación.

Está claro que los dos primeros requisitos no dan lugar a interpretación ni a discrecionalidad de ningún tipo, pero los demás dejan una puerta entre abierta, para aquellos municipios que aspiran a tener un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Ya que dependiendo de quién los interprete podrán obtener una respuesta u otra.

Ciertamente es que tanto Tamarite como los municipios que formaban parte de su antigua circunscripción tenían aquellos rasgos que podían convertirlo sin cumplir los requisitos de forma estricta en un Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción.

Intentando hacer un análisis objetivo de los rasgos de la Comarca de la Litera, se ha llegado a las siguientes averiguaciones:

- 1) El volumen de litigiosidad Según la una estadística del CGPJ del año 1.985 el número de litigios era superior en comparación con el de Fraga, Monzón, Barbastro o Incluso Teruel<sup>19</sup>.
- 2) En cuanto a Las comunicaciones, es evidente que al situar el Juzgado en Monzón era complicada para muchos habitantes de estos pueblos poder comparecer, ya que se encontraban a 55 kilómetros de Monzón como es el caso de Estopiñán. Es necesario que el lector sepa, que actualmente este municipio, así como tampoco ninguno de los otros incluido Tamarite cuenta con una línea de transporte publico hacia Monzón. Alejando este servicio público como es el de la justicia, a aquellas personas que no tienen medios o recursos para poder costarse un transporte privado. En definitiva, no existe ni existió una buena red de comunicación para los habitantes de estos pueblos.
- 3) Por lo que se refiere a las características comarcales y orográficas, es una comarca con una industria agrícola y ganadera prospera y abundante, actualmente encontramos dos de los mataderos más importantes de España en ella, por no decir que el precio de la carne de todo el país se establece en la lonja de Binéfar, municipio que forma parte de la Comarca. Está claro que se infravaloro el potencial económico de la comarca y su capacidad de crecimiento.

---

<sup>19</sup> La estadística del propio Consejo del Poder Judicial, referida al año 1.985, refleja 61 ingresos y 26 sentencias y en asuntos criminales se registraron 160 ingresos y 130 sentencias. En comparación con Fraga que solo se registró 30, con Monzón que solo registro 54 asuntos civiles o incluso con Teruel que solo registro 62, es evidente que el Juzgado de Tamarite desarrollo mayor actividad; en lo Penal los 160 ingresados superaron a Barbastro que solo registro 128. Notas para fundamentar la reivindicación de un juzgado en Tamarite de Litera. José Dufol Abad. Véase anexo documental número 7.

- 4) Otro aspecto, que a mi parecer constituye una seña de identidad de esta comarca es su situación limítrofe con Cataluña, con la que comparten una excelente relación es más muchos de los habitantes de la Comarca de la Litera hablan un dialecto del catalán, así como comparten costumbres con la Comunidad Autónoma vecina, llegando en ocasiones a confundirse el territorio literano con el de la provincia de Lérida. Es importante destacar, que también se produjo un movimiento «pan catalanista» cuya intención fue que esta comarca pasara a formar parte de Cataluña.

Todas estas características y forma de ser de la Comarca de la Litera, alentaron a sus pueblos para iniciar una lucha por el mantenimiento de la Administración de Justicia que tanto necesitaban.

La litera se encontraba en una circunstancia fuerte complejidad debían convencer a los entes autonómicos de sus características y necesidad de tener una Administración de Justicia y más tarde que el legislador lo aceptara.

Como si todo esto no fuera suficiente, surgió un gran problema: El 28 de diciembre de 1989 los secretarios - Interventores de los Ayuntamientos aragoneses de menos de 5.000 habitantes, iniciaron una huelga indefinida por la asunción de las funciones de Secretarios de Juzgados de Paz, impuestos por la Ley de Demarcación y Planta Judicial y las Agrupaciones Secretariales<sup>20</sup>.

Esta huelga no solo afectaba a Aragón, sino que también a Castilla y León y Navarra, las tres Comunidades Autónomas trabajaron de forma continua para luchar por conseguir los objetivos de la huelga, la cual fue desconvocada el 18 de enero de 1.991, como prueba de la buena voluntad de los convocantes y a la espera de que antes del 1 de marzo de 1.991, la Administración tanto Central como Autonómica les comunicara los progresos acontecidos hasta el momento.

La finalidad principal de la huelga era que no faltara en todas las localidades, un servicio de Justicia llevado a cabo por especialistas en Derecho procesal, para poder hacer efectivo el principio de igualdad de los ciudadanos, pilar fundamental del Estado español el cual se denomina estado de Derecho.

---

<sup>20</sup> Véase Anexo documental número 8.

Finalmente, y tras una amplia deliberación el <sup>21</sup>Tribunal Superior de Justicia de Aragón comunicaba a los Ayuntamientos aragoneses lo siguiente:

La disposición final de la Ley 38/1988, no podrá entrar en ejercicio de forma inmediata, sino que lo hará de forma progresiva, según se fueran cumpliendo las exigencias contenidas en los artículos 1º, 2º y 3º de dicha norma legal. Y como consecuencia de ello, los secretarios- Interventores deberían continuar en el ejercicio de las funciones desempeñadas hasta el momento y esperar el nombramiento oficial del Ministerio de Justicia de los Oficiales y Agentes Judiciales que deberán ser titulares de las correspondientes administraciones de justicia.

Parece ser que La ley 38/1988 no satisfacía las necesidades ciudadanas, paradójicamente ese era su principal cometido, ya que dejaba sin una Administración de Justicia en condiciones a muchos municipios casi, en su mayoría de la España rural. Incluso el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón afirmó<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Véase Anexo documental número 9.

<sup>22</sup> «Tratando de interpretar la Orden de 29 de junio de 1991 en un sentido rigurosamente literal se llega a un vacío jurisdiccional imposible de ser completado de ningún modo, lo cual resulta contrario a lo dispuesto en el art. 24 de la Constitución que otorga a todos los españoles el derecho al otorgamiento de la tutela judicial **efectiva** » Anexo documental número 9.

#### **4. LUCHA DE LAS INSTITUCIONES Y CIUDADANÍA DE LA COMARCA DE LA LITERA PARA MANTENER UN JUZGADO EN ELLA**

##### **4.1. ACTUACIONES DE LOS ALCALDES DE LA COMARCA; ELABORACIÓN DE DISTINTOS INFORMES, CARTAS A DISTINTAS INSTITUCIONES Y RESPUESTAS A CERCA DE LA VIABILIDAD DE UN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN EN TAMARITE**

Después de la entrada en vigor a la ley que disponía el fin de los juzgados de distrito, la Comarca de la Litera no tardo en ponerse en marcha para poder cambiar la situación de descontento en la que se encontraban, ya que su Juzgado de Distrito pasaría a ser un Juzgado de Paz. La ley entro en vigor en el a finales del año 1988, y otorgaba un plazo máximo para alcanzar las previsiones en ella contenidas de 4 años hasta el año 1992.

La comarca de la Litera trabajaba a contracorriente, en un primer momento se tenía pensado que el proyecto lo llevara a cabo un ente que representara a toda la Comarca de la Litera, llamado Mancomunidad Intermunicipal de la Litera, pero no pudo ser posible porque la urgencia del proyecto no podía esperar al proceso burocrático el cual se dilataría en el tiempo.

Es importante destacar, que se produjo un cambio en la composición de la Comarca de La Litera<sup>23</sup>, excluyendo a Estada, Estadilla y Almunia de San Juan, por su proximidad a Barbastro y Monzón. Y se añadió Esplús municipio que contaba con 1.621 habitantes y 8.350 Km2, perteneciente a Fraga, pero por su lejanía con esta y las numerosas relaciones con La Litera y con el municipio de Binéfar concretamente paso a formar parte de esta comarca.

A pesar de la imposibilidad de formar un ente institucional, los alcaldes de los municipios de la Comarca realizaron numerosas reuniones para abordar el tema, facultando a Florencio Nadal Escalona, alcalde de Tamarite de Litera, como representante para realizar cuantos tramites y gestiones fueran precisos.

Los tramites más importantes llevados a cabo por el alcalde de Tamarite, en calidad de representante fueron los siguientes:

Se elaboró una petición firmada por los alcaldes de los 14 municipios de la comarca de la Litera dirigida a la Diputación General de Aragón para que informara

---

<sup>23</sup> Véase anexo documental número 5.

favorablemente de la constitución de un Juzgado de Primer Instancia e Instrucción en Tamarite de Litera. Adjuntando una memoria en la que detallaban las razones por las que este juzgado debía situarse en Tamarite, la cual debía ser elevada por la Diputación General de Aragón al Ministro de Justicia.<sup>24</sup>

A su vez se realizaron diversos certificados de los acuerdos adoptados por los 14 municipios de la Litera apoyando la propuesta de creación del juzgado, así como la certificación de los asuntos en el Juzgado de Distrito de Tamarite, para demostrar que no tenía una baja carga de trabajo. Incluso se encargó un estudio al abogado José Dufol Abad titulado: Notas para fundamentar la reivindicación de un juzgado en Tamarite de Litera. El cual aportaba una perspectiva técnica de los reclamos y argumentos de los distintos municipios, considerados sobradamente sólidos y probados a ojos de los alcaldes para demostrar la cabida de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Tamarite de Litera.

Los razonamientos fueron de diversa índole; jurídicos – analizando la distribución judicial y las posibilidades de cumplimiento de los objetivos que la Ley 38/1988 –, económicos, políticos y sociales. Seguidamente expondré los pretextos más relevantes del estudio:

El estudio se ampara en el artículo 24 de la Constitución Española, el cual se refiere a la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales como exigencia constitucional y su cumplimiento por parte de la organización judicial establecida en la Ley 38/1988. Debiendo garantizar el fácil acceso de los ciudadanos a los Juzgados y evitar un exceso de medios.

Y en la tendencia a la concentración y a la comarcalización de servicios. Tras la institucionalización de la autonomía en las Comunidades, y teniendo como precedente a las Comarcas siendo el eje vertebrador de los territorios y unidad física y geográfica aglutinante de fuertes económicas, sociales y culturales. Las cuales no alcanzaron el nivel esperado, y por ello la legislación sectorial ha creado circunscripciones variadas, no coincidentes, con notables disfunciones que han dificultado la prestación de servicios. Pronunciándose la doctrina a cerca de las dificultades que pueden derivar de la falta de previsión en los ordenamientos comarcales.

---

<sup>24</sup> Véase anexo documental número 10.

Es sabido por los autores del estudio, que esta tendencia hacia la concentración resulta inevitable, pero, no definitiva, debiendo evolucionar la Comarca como Ente Territorial en el cual se desarrollen actividades políticas y administrativas que integren unidades municipales interdependientes. Planteando la siguiente pregunta: *¿Qué suerte de ente comarcal declarado como tal, será aquel en el que sus comarcanos hayan obligadamente de acudir a otras comarcas para la obtención de servicios fundamentales?*

Al examinar las características de la Comarca de la Litera en relación a los requisitos previstos en la Ley de Demarcación y Planta Judicial, no se considera que exista inconveniente grave para el mantenimiento del Juzgado en Tamarite y resultando vital para el mantenimiento de la Comarca, siendo un reconocimiento de identidad y realidad de la misma. Un Juzgado en la Comarca ayudaría también a equilibrar la litigiosidad entre cuatro circunscripciones: Barbastro, Monzón, Fraga y Tamarite, utilizando los recursos disponibles de forma más eficaz.

Por lo que se refiere a las instituciones en las que buscaron apoyo; en primer lugar, acudieron a la Diputación General de Aragón, pasado un lapso de tiempo acudieron al Justicia de Aragón, Defensor del Pueblo y del Ministerio de Justicia<sup>25</sup>. Las respuestas de las diversas instituciones fueron dispares, y por lo tanto que existía un atisbo de esperanza para este pueblo.

A continuación, relatare los principales rasgos de las respuestas de las instituciones a las que acudieron:

La primera Institución en ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Tamarite, fue la Diputación General de Aragón- en adelante DGA- concretamente el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales. Al juicio de este ente era necesaria la transformación del Juzgado de Tamarite debía hacerse hacia un Juzgado de Primera Instancia, debido a las diferencias existentes entre la comarca de la Litera y de Monzón, casi resultando ser obligatorio que Tanto Tamarite de Litera como Monzón cuenten con uno, siendo irrelevante en el que se fije la capitalidad. Amparándose en las facultades otorgadas por el Estatuto de Autonomía de Aragón – en adelante EAA–,

---

<sup>25</sup> Véase anexo documental 11.

concretamente en su artículo 32<sup>26</sup>, en consonancia con la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto a la Administración de Justicia. Correspondiendo a la Comunidad Autónoma la facultad de conversión de los Juzgados de Distrito. Pero no todo iban a ser buenas noticias, parece que esta la DGA es la única institución que entiende que debe existir un segundo Juzgado ubicado en la Litera. Ello, no obstante, la Diputación General de Aragón junto a las Cortes de Aragón decidieron interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, el cual estudiaremos en profundidad en el siguiente apartado, el cual consideraba errónea la interpretación de las Instituciones aragonesas de los preceptos que a su entender les concedían la potestad de organizar la demarcación judicial.

Por lo que hace el Justicia de Aragón, su respuesta fue no entraba dentro de su ámbito competencial la supervisión de la Administración de Justicia y en concreto la demarcación y planta judicial porque era un organismo dependiente del Gobierno Central. A pesar de ello esta, la queja fue remida al Defensor del Pueblo el cual si tiene competencias en la materia solicitada.

El Defensor del Pueblo determino que teniendo en cuenta los datos de las cargas de trabajo, y la propuesta de la creación de un segundo Juzgado en el Partido Judicial de Monzón, así como las solicitudes de localidad de tamaritana de que este fuera ubicado en su municipio. La creación de un segundo Juzgado supondría la infrautilización de los dos Juzgados; del existente y del propuesto, no siendo posible prever la necesidad de un segundo juzgado en ese momento.

Ambas instituciones no veían cabida a un Juzgado de Primera Instancia en Tamarite, ya fuera porque no entraba en su campo de competencia, y lo dejaban a cargo del Gobierno del Estado, o que la carga de trabajo no era suficiente para crear un nuevo Juzgado. Siguiendo la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia núm. 62/1990 de 30 de marzo (RTC\1990/ 62) en la que resolvía el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la DGA junto con las cortes generales.

---

<sup>26</sup> «En relación con la Administración de Justicia, exceptuando la militar, corresponde a la Comunidad Autónoma: a) Ejercer todas las facultades que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado ». Art. 32. Estatuto de Autonomía de Aragón Ley Orgánica de 10 de agosto de 1982.



#### 4.2. ANÁLISIS DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADO POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Las presiones realizadas por la agrupación de municipios representada por el alcalde de Tamarite tuvieron efecto, las Cortes de Aragón junto a la Diputación General de Aragón decidieron interponer un recurso de inconstitucionalidad – el cual fue acumulado junto a los interpuestos por la Comunidad Autónoma de Cataluña y resueltos en una misma sentencia número 62/1990 de 30 de marzo – contra determinados artículos de la ley 38/1988 de 28 de diciembre de demarcación y planta judicial. Esta sentencia supuso un antes y un después en la búsqueda de respuestas, es por ello que la analizaremos en profundidad, ya que tras su fallo se esconde la respuesta a si podía existir un juzgado en Tamarite.

El 25 de marzo de 1989, Juan Bautista Monserrat Mesanza, presidente de las Cortes de Aragón, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el art.4, apartado 2 y el anexo I de la Ley 38/1988 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, por estimar que dicho pretexto vulnera lo establecido en el artículo 32.1 b) del Estatuto de Autonomía de Aragón de 1982 (en adelante EAA), en ejecución del Acuerdo del Pleno de las Cortes de Aragón. La fundamentación de esta impugnación es:

- 1) La afección del precepto impugnado de la ley 38/1988 al ámbito de competencias y de autonomía de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- 2) El artículo 152.1 de la Constitución Española, otorga a las Comunidades Autónomas, a través de sus Estatutos de Autonomía, la posibilidad de asunción de competencias sobre aquellas materias que no forman parte del núcleo básico del concepto «poder judicial» o Administración de Justicia. Siendo reafirmada la interpretación de dicho artículo por la LOPJ.
- 3) Afirman que los estatutos de Autonomía forman parte del bloque de constitucionalidad, no pudiendo ser violentados por la ley estatal, excepto cuando se incurra en un vicio de inconstitucionalidad.

Se parte de él examen del artículo 152 CE y la remisión que este hace a la LOPJ y a los principios de unidad e independencia de este. Conforme a los cuales se ha de regular la participación de las Comunidades autónomas en la organización de las demarcaciones judiciales de su respectivo territorio.

Examen de las competencias que el EAA ha atribuido a esta Comunidad Autónoma en relación con la administración de justicia, en su capítulo IV del título I, los cinco preceptos que componen el capítulo se refieren a la organización y funcionamiento del Poder Judicial en Aragón y a la competencia de sus órganos y a las competencias que se atribuyen a la Comunidad Autónoma Aragonesa en materia de justicia. Debiendo hacer especial referencia a la «cláusula subrogatoria» establecida en dicho EAA la cual establece que la Comunidad Autónoma se coloca en el lugar del ejecutivo estatal para el ejercicio de las facultades que la LOPJ le reconozca o atribuya.

En cualquier caso, se razona que no es necesario acudir a la técnica de la cláusula subrogatoria para concluir que la comunidad autónoma aragonesa tiene competencia específica sobre la fijación de demarcaciones judiciales puesto que su artículo 32.1 b) así lo declara, precepto derivado del art. 152.2 de la CE. En consecuencia, es la Comunidad Autónoma la que de acuerdo con el Texto Constitucional ha de establecer los límites territoriales de las demarcaciones judiciales, así como de localizar su capitalidad.

Como consecuencia se afirma por las Cortes de Aragón que el ar. 4.2<sup>27</sup> de Ley de Demarcación y de Planta Judicial choca con las provisiones contenidas en el art. 31.2 b)<sup>28</sup> del EAA incurriendo en inconstitucionalidad. Por lo tanto, se estaría negando una competencia autonómica.

También se solicita la declaración de inconstitucionalidad de las Disposiciones adicionales 1ª, 2ª y 3ª y por conexión necesaria con el art 41.2 de esta misma ley, estos también lo son, basándose en el notorio exceso de competencia en la fijación de demarcaciones efectuada por el Poder central en relación a los órganos jurisdiccionales con sede en Aragón.

Suplicando que se declare la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de los artículos impugnados de la LDPJ.

El 27 de junio de 1989 el Abogado del estado presento sus alegaciones – a continuación, analizaremos alegaciones del representante del Estado, aunque algunas de

---

<sup>27</sup> 4.2 Ley 38/1988. Los partidos judiciales tienen el ámbito territorial del municipio o municipios que los integran, conforme se establece en el Anexo I de esta Ley

<sup>28</sup> Art.23.2b) EAA En la relación con la Administración de Justicia. exceptuando la militar, corresponde a la Comunidad Autónoma) Fijar los límites de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales de Aragón localizando su capitalidad.

ellas no hayan sido objeto de el recurso interpuesto por las instituciones aragonesas, es interesante tenerlas en cuenta, debemos recordar que fue resuelto de forma acumulativa junto a otros recursos de inconstitucionalidad de misma índole—:

Se inicia el escrito del Abogado del estado con unas consideraciones de los órganos recurrentes, llegando a la conclusión de que los recursos interpuestos sean totalmente inadmisibles, debido a que las demandas articulan una reivindicación competencial y no una lesión de las competencias autonómicas, siendo este último uno de los supuestos previstos en la CE y desarrollados por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional – en adelante LOTC– como supuesto abstracto de legitimación , para casos en los que las Comunidades Autónomas –en adelante CCAA– vean afectados su propio ámbito de autonomía, tal y como establece el artículo 32.1 LOTC.

A continuación, se considera que la interpretación expuesta en los recursos de la expresión “administración de justicia” del artículo 149.1.5.a CE para atribuir competencia exclusiva sobre ella al Estado, es totalmente errónea. Ya que la finalidad del artículo 149.1 de la Ce es deslindar las competencias entre el Estado y las CCAA, respondiendo el pretexto a una ordenación de materias y no de funciones. El artículo 149.1. 5ª de la CE se determina en primer lugar que la administración de justicia es una “materia” – por lo tanto, le corresponde al Estado la totalidad y plenitud de funciones legislativas, ejecutivas y jurisdiccionales sobre la misma– y en segundo lugar, que las potestades jurisdiccionales, que tal vez sí que habría de reconocerse a favor de las CCAA, si no existiera este precepto, quedan también, reservadas de forma específica al Estado.

En conclusión, la Administración de Justicia, se entiende en la Constitución como todas las actividades del Estado tendentes a satisfacer una necesidad colectiva primaria, apoyándose también en el contenido del art. 121 de esta misma norma también, donde parece distinguirse entre “función judicial” y Administración de Justicia”. Es decir, el art149.1, 5ª de la CE comprende no solo la función de juzgar y ejecutar lo juzgado, sino el conjunto de funciones ejecutivas colaterales y auxiliares que facilitan el normal desarrollo de esa función del estado, inherente a la soberanía.

Resultando una interpretación inversa a la de los recurrentes, ya que si así fuera, sería inútil, debido a que la CE encomienda a las leyes orgánicas las cuales son adoptadas por el estado la ordenación de la constitución, funcionamiento y gobierno de

los Juzgados y Tribunales, el estatuto jurídico de Jueces y Magistrados. Concluyendo el representante del estado que su interpretación esta sostenida también lo dispuesto en los Estatutos de Autonomía del País Vasco, Cataluña y Galicia.

En tercer lugar, el Abogado del Estado examina la “Clausula Subrogatoria” contenida en el artículo 32.1,a)EAA y en el 18.1 del Estatuto Autonómico de Cataluña – en adelante EAC–, estableciendo el representante del estado que los Estatutos de Autonomía –en adelante EEAA –en el orden jerárquico de fuentes asumen una posición subordinada a la Constitución y como consecuencia su interpretación siempre ha de ser de acuerdo a esta, de tal manera que el problema competencial ha de venir predeterminado de forma preferente en la constitución y en función de ello dispondrán los EEAA.

Ello, no obstante, el Abogado del Estado advierte de que puede llamar la atención una comparación entre el texto constitucional y los Estatutos que podría resultar en una regulación antinómica: La constitución contempla la competencia estatal para todo lo concerniente a la Administración de justicia (salvedad del artículo 152.1 CE) mientras que los EEAA establecen amplias posibilidades de intervención a las CCAA e incluso prevén el normal ejercicio por aquellas de facultades que las LOPJ y la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado.

Para resolver esta contradicción es necesario recordar que el art. 152.1 refiere la previsión de competencia autonómica a “la organización de las demarcaciones judiciales del territorio”, este elemento organizativo no puede entenderse de otra forma que no sea el de ampliar las posibilidades concretadas en la pura “demarcación judicial”. Es decir; ofrece a las CCAA que ordenen las demarcaciones judiciales de la manera en que estas sean lo más eficientes y eficaces posibles, pero de ningún modo se debe interpretar en el sentido en que puedan ser modificadas por los entes autonómicos.

Justificando así la coexistencia de los EEAA, los cuales deben definir la asunción de una titularidad (supuestos de participación) y la Ley Orgánica encargada de articularlos de forma concreta. Concluyendo en que los estatutos deben articular competencias autonómicas directas, con la posibilidad de colaboración con otras normas.

Es de importancia destacar el siguiente razonamiento, el cual establece que las facultades autonómicas enumeradas en el párrafo siguiente, son ejecutadas en favor del

gobierno, siendo inviable el reconocimiento en favor de las CCAA, por su relevancia es citado literalmente:

*«Resulta, en fin, chocante que si los Estatutos encierran una competencia que pretende ser general u omnicomprendiva de toda facultad gubernativa, ellos mismos mencionen a renglón seguido facultades concretas (fijación de las demarcaciones, localización de capitalidad o coadyuvancia en la instalación de los Juzgados) que son prototípicamente ejecutivas y cuya mención aparte no sería inteligible si se hubiera de reconocer en favor de las Comunidades Autónomas, Según se pretende, la totalidad de las competencias ejecutivas que se establecieran en favor del Gobierno ».*<sup>29</sup>

En relación a la interpretación de la expresión «organización de las demarcaciones judiciales» del artículo 152.1 de la CE. En primer lugar, la interpretación del texto constitucional por parte de los Estatutos es realizada en sentido amplio para dar cabida a otras competencias en el ámbito de la Administración de Justicia. Según el representante del estado el artículo 152.1 debe ser entendido como una acción colaboradora entre las CCAA y el Gobierno, en la que las primeras participan en las operaciones de demarcación, supeditada a la previsión estatutaria y determinación precisa de la Ley Orgánica.

En cuanto al precepto 32.1, b) del EA, advierte que la expresión “fijación de la delimitación”, se refiere a una competencia colaboradora diseñada en el art. 35 LOPJ, debiendo ser entendida así a pesar de que los rasgos definitorios estén o no contemplados en los EEAA entendiéndolo así la STC 97/1989.

Por lo que se refiere a la capitalidad, la ley ha establecido que “las CCAA determinaran por ley, la capitalidad de los partidos judiciales y así lo establece también la LOPJ” resultando en una colaboración normativa.

Tras el razonamiento del Abogado del Estado el Tribunal Constitucional resuelve, centrándonos en las partes relevantes a la petición de inconstitucionalidad de las la DGA y las Cortes de Aragón, dividiéndolo en ámbitos temáticos:

---

<sup>29</sup> TC (pleno) Sentencia núm. 62/1990 de 30 de marzo RTC/1990/62, pág. 31.

- A. Legitimación de los recurrentes: El tribunal entiende que los órganos recurrentes están legitimados tanto para recurrir preceptos de una ley la cual invade determinadas competencias de la Comunidad Autónoma, así como aquellas cuestiones o materias que el Estatuto de Autonomía atribuye como facultad o mandato a las Comunidades<sup>30</sup> y también están legitimados para cuestionar la validez de los preceptos de la Ley 38/1988.
- B. Clausulas subrogatorias en los Estatutos de Autonomía: Es cierto que, si se parte de una concepción extensa del concepto “Administración de Justicia sin identificarlo como materia en exclusiva del Estado, generaría una oposición entre Estatutos de Autonomía, asumiendo mediante la subrogación competencias vedadas. Es por ello que hay que buscar una interpretación constitucional la cual salve esta aparente contradicción.<sup>31</sup> No pudiéndose interpretar que los Estatutos de Autonomía actúan como instrumentos de transferencia o delegación de competencia estatal, ni tampoco que la cláusula subrogatoria solo puede hacer referencia a las funciones que expresamente le permite la Constitución. Con lo cual, la cláusula subrogatoria referente a las facultades en materia de Administración de Justicia que se atribuyan al Gobierno de la Nación, no puede ser consideradas como inconstitucional, debido a que no impide que la mencionada clausula cobre efectividad. No oponiéndose a las competencias asumidas por las CCAA.
- C. Competencias autonómicas relativas a la demarcación judicial. En cuanto a la impugnación del artículo 4 apartado 2 y el anexo I de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre de Demarcación y Planta Judicial, que al entender de los recurrentes desconocen o invaden las competencias que les han sido otorgadas por los EEAA, - artículo 23.1 b) EAA- en consonancia con lo dispuesto en el artículo 152.1 de la Constitución<sup>32</sup>.

El cual debe ser entendido como una excepción a la regla general y no como una competencia de las CCAA para fijar la delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales en su respectivo territorio. No existiendo vulneración de

---

<sup>30</sup> STC 84/1982, fundamento jurídico 1.º.

<sup>31</sup> STC 56/1990

<sup>32</sup> Artículo 152.1 CE: En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y formas de participación de aquella organización de las demarcaciones judiciales del territorio de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

la competencia autonómica, ya que los preceptos prevén la participación autonómica, pero en ningún momento esta resulta decisoria.

Tras la exposición de los motivos anteriores el Tribunal resolvió de la siguiente forma:

- 1.º Declarar inconstitucional el art. 8.2 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, en los términos contenidos en el fundamento jurídico 10, b).
- 2.º Declarar que no son inconstitucionales los arts. 32.5 y 50.3, interpretados según los fundamentos jurídicos 6.º, apartado i), y 12.º, respectivamente, de la presente Sentencia.
- 3.º Desestimar los recursos en todo lo demás.

#### **4.3. SENTENCIA PLENO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 57/1990 DE 29 DE MARZO. RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD 859, 861, 864 Y 870/1985 (ACUMULADOS)**

De la lectura del apartado anterior, y de la Sentencia del TC 62/1990 de 30 de marzo – para una mayor comprensión – resolutoria de varios recursos de inconstitucionalidad acumulados contra preceptos de la nueva Ley de demarcación y Planta Judicial, se desprende que el tribunal para pronunciarse acerca de la pretensión del Gobierno de Aragón entre otras, se basaba en legislación y sobre todo en jurisprudencia, concretamente en la <sup>33</sup>Sentencia del TC 56/1990 de 29 de marzo.

Es cierto que existe una diferencia prominente entre ambas; la sentencia 1990/56 resuelve recursos de inconstitucionalidad acumulados referidos a determinados preceptos de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de junio del Poder Judicial. Y por otro lado la sentencia 1990/62 resuelve recursos a cerca de la Ley 38/1988 de Demarcación y Planta Judicial. De forma prematura pueden identificarse como inconexas, pero no es así.

Como bien sabemos, en el texto referente a la STC 62/1990, tanto el abogado del estado como el tribunal para argumentar su fallo, se basan en la correcta interpretación

---

<sup>33</sup> Pleno. Sentencia 56/1990, de 29 de marzo. Recursos de inconstitucionalidad 859. 861. 864 y 870/1985 (acumulados), promovidos por el Parlamento de la-Generalidad de Cataluña, el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, la Junta de Galicia y el Gobierno Vasco, respectivamente, contra determinados preceptos de la L.O. 6/1985. de 1 de julio, del Poder Judicial. *BOE núm. 107, de 04 de mayo de 1990.*

de los preceptos de la Ley 38/1988 en relación con la Constitución como superior jerárquica, los EEAA y LOPJ. Entendiendo, que la coexistencia de todas ellas, no puede ser de otra forma que en perfecta armonía y ejecución de los principios, delimitaciones y derechos constitucionales.

En la sentencia 56/1990 se resuelven los recursos de inconstitucionalidad acumulados números 859/1985 interpuesto por el Parlamento de la Generalidad de Cataluña, 861/1985 interpuesto por el Consejo ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, 864/1985 interpuesto por la Junta de Galicia y 870/1985 interpuesto por el Gobierno Vasco frente a determinados preceptos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Los aspectos debatidos en por parte de las CCAA y, muy similares por no decir idénticos a los de la STC 62/1990 son los siguientes:

- A. Legitimación de los recurrentes, cuestión que es planteada por el Abogado del Estado. Este tribunal entiende, que: “la legitimación de las Comunidades Autónomas para interponer el recurso de inconstitucionalidad no está objetivamente limitada a la defensa de sus competencias propias, si esta expresión se entiende en su sentido habitual, como acción dirigida a reivindicar para sí la titularidad de una competencia ejercida por otro». No debiéndose confundir bajo ningún concepto de recurso de inconstitucionalidad con el conflicto de competencias. Entendiendo, que los recurrentes se encuentran legitimados para interponer dicho recurso. Este fundamento ya ha sido expuesto en numerosas resoluciones de este mismo tribunal: STC 84/1982, fundamento jurídico 1.º, y, en términos análogos, SSTC 26/1987 y 74/1987, fundamento jurídico 1.º de ambas resoluciones).
- B. Clausulas subrogatorias en los EEAA; en relación con la distribución competencias entre el Estado y las CAA, establecidas por la LOPJ. Los recurrentes, entienden que la normativa estatal entorpece la asunción de las competencias a realizar por la CCAA, en las denominadas «clausula subrogatoria». Por su parte, el Tribunal disecciona el asunto de la siguiente forma:
  - a. Alcance de la cláusula presente en algunos EEAA. Las competencias que asumen las CCAA a través de la «clausula subrogatoria» no pueden adentrarse en el núcleo de la Administración de Justicia en sentido estricto



(Art. 249.1.5 CE. Siendo conveniente recordar que estas competencias no pueden ser legislativas.

- b. Administración de la Administración de Justicia. Las CCAA solamente pueden actuar en este ámbito, en aquellos aspectos que no estén asignados al Gobierno o a alguno de sus departamentos.
- C. Competencias autonómicas relativas a la demarcación judicial. Este punto, será analizado de forma más extensas, ya que es un punto de inflexión a la hora de entender lo acontecido.

Los recurrentes entienden que, se produce una invasión sus competencias, atribuidas mediante los EEAA en virtud del artículo 152.1, párrafo segundo de la CE, de participación en la organización de las demarcaciones. El tribunal, resuelve mediante el siguiente razonamiento:

En primer lugar, debe entenderse este precepto constitucional como una excepción a la norma general, la cual como bien sabemos, reserva la como competencia exclusiva del Estado la Administración de Justicia. Previendo la asunción de competencias por parte de las CCAA, que son limitadas por la LOPJ al establecer que los EEAA deben integrar la competencia contenida en el art 152.1 párrafo segundo de la CE. Encontrándonos ante un entramado normativo;

Por un lado, tenemos la CE, a la que llamaremos norma habilitante, porque prevé la posibilidad de asunción de competencias relativas con la organización de las demarcaciones judiciales por parte de las CCAA mediante sus EEAA.

Tras la CE, encontramos a los EEAA, encargados de fundamentar la previsión constitucional de competencias en dicha materia.

Y por último la LOPJ, delimitando el margen de actuación de las CCAA, en relación con el ejercicio de sus competencias, lo que se traduce al articulado de estas.

Cierto es, que los EEAA han regulado el ejercicio de las competencias sobre demarcaciones judiciales, sin tener en cuenta el marco normativo. Esto se debe a una situación fortuita, debido al retraso en la aprobación y publicación de la última de las normas nombradas: LOPJ, creando situaciones de inconstitucionalidad.

En conclusión, la Constitución ha permitido la asunción de competencias participativas en la Organización de las demarcaciones judiciales, pero no el

establecimiento de la planta judicial, siendo esta competencia exclusiva del estado (art 149.1.5 CE). Para dotar a este razonamiento de un carácter más visual, debemos dividirlo en dos: una parte referente a la planta judicial y otra a la demarcación.

En primer lugar; entender que las demandas de inconstitucionalidad referentes a preceptos de la LOPJ referentes a la planta judicial no pueden prosperar por ser competencia del estado. Como inciso, la planta judicial es la referente los tipos de órganos judiciales, número y distribución.

Y en segundo lugar, tener presente que las CCAA pueden participar en la organización de las demarcaciones judiciales, lo que se traduce a:

- 1) La fijación de la delimitación de las demarcaciones judiciales, refiriéndose a las diferentes del ámbito provincial y autonómico. Fijándose siempre conforme a la LOPJ.
- 2) La localización de su capitalidad.

## **5. ACTUALIDAD JUDICIAL DE LA COMARCA DE LA LITERA. JUZGADOS DE PAZ EN LA COMARCA ESPECIAL ÉNFASIS EN TAMARITE DE LITERA**

En este apartado pondremos punto y final a la investigación, centrándonos en la situación en la que nos encontramos actualmente. A pesar de los numerosos esfuerzos realizados tanto por los distintos alcaldes de los pueblos que componen la Comarca de la Litera, sus gentes y a las Instituciones Aragonesas, podemos decir que todo el esfuerzo fue en vano.

Tras la demoledora sentencia del Tribunal Constitucional en el año 1990 y su negativa a la interpretación de los textos legales por parte de la Comunidad Autónoma Aragonesa, entendiendo que la demarcación judicial era competencia del Gobierno de la Nación, la, aunque fuera llevada a junto con las Comunidades Autónomas, pero estas como meras colaboradoras. Hacia desaparecer toda posibilidad de poder situar un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en la Comarca de la litera, a pesar de ello no se dieron por vencidos y acudieron a nuevas instituciones, las cuales les mostraron su negativa también. Tamarite de Litera y el resto de municipios de la Comarca tuvieron que conformarse con un Juzgado de Paz, dejando relegados los asuntos de mayor envergadura e importancia a los Juzgados de Monzón desde aquel momento a la actualidad.

El plazo otorgado por la Ley de Demarcación y Planta Judicial para alcanzar las previsiones previstas en ella era de 4 años desde su entrada en vigor, tenían hasta el año 1992 para prepararse y adaptarse a la situación en la que quedaría la justicia en la Comarca de la Litera.

En los siguientes apartados describiremos las funciones desempeñadas por un Juzgado de Paz, y la suerte que corren a día de hoy, ponderando la necesidad de estos órganos en entornos rurales, como es el caso de las diversas poblaciones que componen la Comarca de la Litera.

El Capítulo VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial encontramos las disposiciones mediante las cuales se rigen los Juzgados de Paz. Estableciendo que en cada municipio que no haya Juzgado de Primera Instancia encontraremos un Juzgado de Paz, asistido por un juez no profesional, encargado de resolver cuestiones de menor relevancia.

Conforme a lo dispuesto en la LOPJ, a partir del año 1992 cada municipio de la Comarca de la Litera debía contar con un Juzgado de Paz desempeñando las siguientes funciones:

- 1) Realizar las inscripciones provenientes de las resoluciones emitidas por la Dirección General de los Registros y del Notariado, en relación a acciones o hechos válidos para ser inscritos en el Registro Civil.
- 2) Inscripción documental original y conservar las actas de nacimiento, matrimonio o defunción, documentos referentes al estado civil del ciudadano.
- 3) Realizar todas las funciones que le son otorgadas por las leyes, concretamente las establecidas en el artículo 100 de la LOPJ; en el orden civil, conocerán de la sustanciación en primera instancia, fallo y ejecución de los procesos que determine la ley. Y en el orden penal en los procesos por faltas y actuaciones penales de prevención o las establecidas en las leyes.

Sin embargo, en el año XX los Juzgados de Paz tal y como los había concebido la ley desaparecieron en muchos de los pueblos de la Comarca; Albelda, Alcámpel, Altorricón, Baells, Baldellou, Camporrells, Castillonroy conservando solamente las funciones de Registro Civil, el trámite de asuntos civiles y penales pasaba al Juzgado de Paz de Tamarite, volviendo a depender de este municipio. En conclusión, Tamarite continuaba realizando las funciones propias como Juzgado de Paz, y asume las del resto de poblaciones que carecían de él.

Como breve apunte, podemos decir que la situación de los pueblos que vieron desaparecer su Juzgado de Paz, empeora por momentos, ya que se tenían que trasladar a Tamarite para abordar asuntos de poca importancia y a Monzón para todos aquellos que no estaban facultados a estos pequeños Juzgados. Incrementando la dependencia, esta vez doble, para obtener un servicio ciudadano básico como es la justicia.

En 2014, el Ministro de Justicia llevó al Consejo de Ministros el anteproyecto de reforma de la Ley del Poder Judicial, contempla la desaparición de los Juzgados de Paz, con el objetivo de dotar de mayor profesionalidad a la justicia. Esto supondría la eliminación de los 7.900 Juzgados de Paz que había en funcionamiento en España, lo que se traduce a 230 en Aragón, a pesar de resolver más de 50.000 asuntos civiles y penales cada año. El proyecto contó con el visto bueno del consejo de ministros, a pesar

de ello, actualmente este proceso se encuentra paralizado, aunque como bien sabemos, se han producido agrupaciones secretariales, eliminando Juzgados en municipios de pocos habitantes.

Nos encontramos ante una tendencia hacia la profesionalización de la justicia, para muchos estos pequeños juzgados se encuentran desfasados y no pueden ser ubicados en el sistema judicial, por varias razones. Una de ellas es el carácter lego del juez de paz, es decir; no estar licenciado en derecho y como consecuencia el desconocimiento de las nociones básicas jurídicas. Por otro lado, el escaso volumen de trabajo no ejerciendo una de las competencias que tiene asignadas: la descarga de trabajo de los Juzgados de Primera Instancia. Por último, el personal y medios con los que cuentan son insuficientes, ya que, a pesar de tener pocos asuntos, estos ya se vuelven demasiados.

Al hilo de la última razón esgrimida, y haciendo referencia al estado en el que se encuentra el Juzgado de Paz de Tamarite, el sindicato Central Sindical Independiente de Funcionarios, denunció a principios de este año, 2020, el cierre temporal forzoso del Juzgado y Registro por falta de personal. La vacante dejada por uno de los dos funcionarios y la ausencia temporal de este otro, obliga al cierre, cubriendo las bajas movilizándolo al personal de unas agrupaciones a otras. En este caso, acudió una funcionaria de Binéfar, atendiendo las tareas del juzgado en un horario reducido.

Tanto en Tamarite como en Binéfar quedan por cubrir dos plazas vacantes de funcionarios, en un momento en el que se produce un aumento de trabajo, por la apertura de un segundo matadero. Desde el CSIF se ha solicitado a la Administración de Justicia el inmediato nombramiento de personal interino, ya que con esta situación es imposible dar un servicio en condiciones a los ciudadanos.

## 6. CONCLUSIONES

Al finalizar la lectura y realización de este trabajo podemos concluir lo siguiente:

Las diversas reformas legislativas han ido marcando el rumbo de la justicia en este pequeño municipio, el cual se encontraba profundamente convencido de que debía contar con un Juzgado en él. Ciertamente, que en numerosas ocasiones el afán de lograr su objetivo, no permitía interpretar con claridad los textos normativos, como es el caso de las diversas interpretaciones de la LOPJ o del alcance de las competencias que tenían asignadas en el Estatuto de Autonomía de Aragón, de ello ya se encargaría el Tribunal Constitucional negándoles el tan deseado Juzgado.

A pesar de la eficacia y mejora de la justicia que buscaba la nombrada en tantas ocasiones Ley 38/1988, a mi parecer se logró todo lo contrario en lo que se refiere al medio rural. Es lógico que la Justicia debe tener un rendimiento, y este debe ser medido, para poder tener una noción de cuán necesaria es. Pero no debemos olvidar la diferencia abismal del medio rural con las ciudades o municipios que cuentan con un número elevado de población, y la peligrosidad de crear un criterio hegemónico para dotarlos de un servicio ciudadano básico y fundamental como es la justicia.

En muchas ocasiones, dependiendo del ojo crítico con el que se quieran interpretar o entender, los diferentes textos extraídos de los archivos, los criterios utilizados eran propios de un momento coyuntural y no eran fieles a la realidad. El número de asuntos inferior a lo deseable, criterio determinante para el destino de la justicia en estos municipios, hubiese podido ser enfocado desde otro prisma; centrándose en la parte de trato personal y no en el criterio económico. No debemos olvidar que, a fin de cuentas, la justicia se adentra en el ámbito personal, por ello debe ser rigurosa y de la mayor calidad posible, cosa que hubiese sido fácil de alcanzar al no encontrarse saturada esta institución.

Las características y capacidades de crecimiento de la Comarca de la Litera se infravaloraron. Todas aquellas industrias nombradas para intentar convencer de la cabida del Juzgado de Primera Instancia en Tamarite siguen en funcionamiento e incluso se han creado muchas de nuevas. La despoblación es notoria pero no deja de ser una consecuencia de privar de medios a los municipios, que como sabemos muchos no tienen administración de justicia, pero tampoco asistencia médica, educación o servicios sociales.

Al fin y al cabo, quien quiere vivir en un lugar en el que no puede gozar de los servicios básicos ciudadanos. La concentración de servicios, y el abandono del medio rural, aceleran su despoblación. Quizás si se hubiese otorgado el Juzgado tan solicitado por los habitantes de esta comarca y por instituciones a nivel provincial, la suerte de estos municipios sería distinta.

## 7. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

MONTES CRESPO, Luis Fernando; FERNANDEZ FERNANDEZ, M.<sup>a</sup> Elia, *Apuntes para un estudio de la demarcación judicial española*. Boletín Ministerio de Justicia número 1624.

M. T. F, *Adiós a los jueces de paz*. En el Heraldo de Aragón, 4 de abril de 2014.  
<<https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/04/08/adios-a-los-jueces-de-paz-492720.html>>

EFE. *Denuncian que la falta de personal obliga a cerrar el juzgado de paz de Tamarite*. En el Heraldo de Aragón, 14 de febrero de 2020  
<<https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/02/14/denuncian-falta-personal-obliga-cerrar-juzgado-paz-tamarite-litera-1358798.html>>



## 8. FUENTES DE ARCHIVO UTILIZADAS

CAMPORRELLS. Archivo del Ayuntamiento. Objeto: Juzgado.

BALDELLOU. Archivo del Ayuntamiento. Objeto: Juzgado.

HUESCA. Archivo de la Diputación Provincial. Objeto: Supresión comarcal Tamarite de Litera. Idem Sariñena / Negociado: Gobernación / Número 6656 / Clase: Agrupaciones / Signatura 257/3.

HUESCA. Archivo de la Diputación Provincial. Objeto: Escrito Colegio Abogados sobre variancioines de la provincia / Negociado: Gobernación / Número 95466 / Clase: Indeterminado / Signatura 2437/48.

HUESCA. Archivo de la Diputación Provincial. Objeto: Peticion de apoyo dde diversos ayutnamientos para la creacion de juzados en: Tamarite, Sariñena, Benabarre, Graus y Binefar./ Negociado: Gobernación / Número 11553 / Clase: Indeterminado / Signatura 1024/13.

HUESCA. Archivo de la Diputación Provincial. Objeto: Peticion del Ayuntamiento de Tamarite para que se apoye su pretension de que el juzado de distrito con sede en Tamarite se transforme en Juzgado de primera instancia e instrucción / Negociado: Gobernación / Número11580 / Clase: Indeterminado / Signatura 1024/41.

TAMARITE DE LITERA. Archivo del Ayuntamiento. Objeto: Expediente sobre reivindicación de juzgado de distrito de Tamarite de Litera en juzgado de 1ª Instancia. Documentación de los 14 municipios que forman la comarca y firmas recogidas. Signatura:787/7.

TAMARITE DE LITERA. Archivo del Ayuntamiento. Objeto: Expediente- Dossier sobre el juzgado: Reivindicación de Juzgado de distrito de Tamarite de Litera en juzgado de 1ªinstancia. Documentación de los 14 municipios que forman la Comarca de la Litera. Signatura 787/6.

## 9. LEGISLACIÓN UTILIZADA

Constitución Española 1978.

«BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1978. Referencia: BOE-A-1978-31229.

<<https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf>>

Ley de bases para la reforma de la Justicia Municipal de 1944.

«BOE» núm. 86, de 11 de abril de 1967. Referencia: BOE-A-1967-5594.

<<https://www.boe.es/boe/dias/1967/04/11/pdfs/A04813-04814.pdf>>

Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial.

«BOE» núm. 313, de 30 de diciembre de 1988. Referencia: BOE-A-1988-29622.

<<https://www.boe.es/buscar/pdf/1988/BOE-A-1988-29622-consolidado.pdf>>

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

«BOE» núm. 157, de 02 de julio de 1985. Referencia: BOE-A-1985-12666.

<<https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12666-consolidado.pdf>>

Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.

«BOE» núm. 97, de 23/04/2007. Referencia: BOE-A-2007-8444.

<<https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-8444-consolidado.pdf>>

## 10. JURISPRUDENCIA UTILIZADA

SENTENCIA 62/1990, de 30 de marzo.

BOE núm. 109, de 07 de mayo de 1990. ECLI:ES:TC:1990:62.

<<http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/1487>>

SENTENCIA 56/1990, de 29 de marzo

BOE núm. 107, de 04 de mayo de 1990. ECLI:ES:TC: 1990:56.

<<http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/1481>>

## 11. ANEXOS DOCUMENTALES

### ANEXO DOCUMENTAL N° 1.

Abreviaturas empleadas:

ADPH = Archivo Diputación Provincial de Huesca.

ATZ= Audiencia Territorial de Zaragoza

1

Huesca, 4 de noviembre de 1974

NOTIFICACIÓN DE LA ATZ COMUNICANDO AL JUZGADO COMARCAL DE TAMARITE SU POSIBLE SUPRESIÓN, ASÍ COMO LA SOLITUD DE REMISIÓN DE UN INFORME POR PARTE DE ÉSTE.

ADPH. Objeto: Supresión comarcal Tamarite de Litera. Idem Sariñena / Negociado: Gobernación / Número 6656 / Clase : Agrupaciones / Signatura 257/3.

*1.Sello registro de entrada Diputación Provincial de Huesca.*

*2.Encabezado institucional ATZ.*

*3.Sello registro de salida de la ATZ.*

*4. Sello ATZ.*

[1.Sello registro de entrada]

[2.Encabezado institucional]

[3.Sello registro salida]

Teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en el Juzgado Comarcal de TAMARITE DE LITERA, la Direccion General de Justicia en comunicacion de fecha 22 del actual,-inidca que se incoe el expediente para la posible supresion del mencionado Juzgado de Comarcal, de acuerdo con lo establecido en la Base 1ª de la Ley de 19 de Julio de 1944 y en el Decreto de 8 de noviembre del mismo año, en cuyas actuaciones debiera figura el informe de esa Corporacion.

Por lo que ruego a V.I que a la brevedad posible remita un informe sobre el particular, aportando la mayor cantidad de datos, a fin de recogerlos por esta Presidencia y en su día, elevar a la Superioridad inofme- propuesta de la Sala de Gobierno referente al caso.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Zaragoza, 31 de octubre de 1974

Sr. Presidente de la Excma . Diputacion Provincial.

HUESCA.

[4.Sello institucional]

DEFER

## ANEXO DOCUMENTAL Nº 2.

Abreviaturas empleadas:

ADPH = Archivo Diputación Provincial de Huesca.

2

Huesca, 27 de noviembre de 1974

INFORME REMITIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE TAMARITE ANTE LA POSIBLE SUPRESIÓN DEL JUZGADO COMARCAL DE ESTA POBLACIÓN.

ADPH. Objeto: Supresión comarcal Tamarite de Litera. Idem Sariñena / Negociado: Gobernación / Número 6656 / Clase : Agrupaciones / Signatura 257/3.

### *1.Sello Ayuntamiento de Tamarite de Litera.*

INFORME QUE EL AYUNTAMIENTO DE TAMARITE DE LITERA EMITE PARA UNIR AL EXPEDIENTE SOBRE LA POSIBLE SUPRESION DEL JUZGADO COMARCAL DE ESTA POBLACION.-

Empezamos el desarrollo de este Informe reproduciendo literalmente los textos legales vigentes que son de aplicación a la materia, por estimar que con ello daremos mayor sentido y alcance al contenido y conceptos en el vertidos.

La Ley de Bases de la Justicia Municipal de 19 de julio de 1944 en su Base 1ª. Al hablar de la división territorial dice: A los efectos de esta Ley, los municipios, con exclusión de aquellos en que radiquen Juzgados Municipales, se agrupará en Comarcas.

Al constituir las se tendrán en cuenta la densidad de población de la región, distancia y medios de comunicación entre los Municipios que deban integrarlas y la capitalidad de la comarca y todos aquellos factores y elementos que contribuyan a la aproximación de los núcleos urbanos que hayan de formarlos. En cada una de ellas existirá un centro comarcal, donde tendrá su residencia oficial el Juzgado de este nombre que, a más de su jurisdicción sobre el término municipal en que radique, la tendrá sobre todos los que constituyan la comarca.

En una misma comarca no se agruparán Municipios cuya suma de población sea superior a 20.000 habitantes y solo excepcionalmente se llegará a esta cifra; antes bien el Ministerio de Justicia, al constituir las, tenderá a que no rebasen de las diez mil almas. El límite máximo de población que se señala sólo podrá superarse en aquellos casos en que el mantenerlo cause grave perturbación de la demarcación judicial o cuando el exceso demográfico sea tan reducido que no justifique la creación de una nueva comarca.

En ningún caso se podrán reunir en la misma comarca Municipios que correspondan a distintos partidos judiciales ni a diferentes provincias.

El Decreto de 8 de noviembre de 1944 desarrolló la Base 1ª de la citada Ley, coincidiendo esencialmente con el contenido de la misma, por lo que creemos innecesario transcribir ningún párrafo de su contenido.

MUNICIPIOS QUE COMPRENDE EL JUZGADO COMARCAL DE TAMARITE DE LITERA.-

El la actualidad está compuesto por 16 Municipios o Juzgados de Paz y que son los siguientes: Albelda, Alcampell, Almunia de San Juan, Altorricón, Azanuy, Binéfar, Camporrells, Castillonroy, Estada, Estadilla, Estopiñán, San Esteban de Litera, Peralta de Calasanz, Baldellou y Tamarite de Litera.

## DEMOGRAFÍA

---

La Comarca de Tamarite de Litera tiene dos zonas perfectamente diferenciadas, aunque esto no disminuya en nada su carácter de comarca definida por elementos naturales. Estas dos zonas están motivadas por la configuración del terreno y por el Canal de Aragón y Cataluña que atraviesa parte de la Comarca habiendo aparecido en su recorrido una amplia y fértil huerta en su mayoría constituida por frutales . En la otra zona, aunque existan regadíos, en su mayoría son tierras de secano y más accidentadas.

La evolución demográfica ha sido distinta en cada una de las zonas. En la primera, que la componen Albelda, Altorricón, Alcampell, Binéfar y Tamarite, su población en términos absolutos ha experimentado aumento durante la década del sesenta, que han sido los años críticos del gran éxodo de los habitantes de los pueblos a las grandes ciudades. La segunda, compuesta por el resto de los Municipios, durante dicho periodo sufrió disminuciones su población aunque de forma moderada, habiéndolo entrado en estos momentos en su proceso de estabilización.

Estos dos movimientos de signo distinto han hecho que en términos generales la Comarca de Tamarite de Litera haya conservado su población, compensándose la pérdida en una de ellas con el crecimiento experimentado en la otra. En el censo oficial de 1970 la población total de los municipios que comprende el Juzgado Comarcal alcanzó la cifra de 23.262 habitantes.

## PREVISIONES DEMOGRÁFICAS

---

Es de prever que el proceso demográfico de los últimos años son el que se produzcan en el futuro, con la posibilidad de que se establezca en la zona que se ha observado decrecimiento y en la que se experimenta aumento éste se acentúe, lo que ocasionaría que las cifras totales de la comarca se elevasen.

Estas previsiones están fundamentadas en las características de su economía. La primera de las zonas descrita -que comprende 16.161 habitantes de los 23.262 que tiene la comarca-, posee una economía floreciente y de gran vitalidad, un nivel de vida superior a la media nacional y sumamente equilibrada en sus distintos sectores. Como muestra de ello diremos que solamente en Tamarite de Litera existe un turismo por cada seis habitantes, un vehículo motorizado por cada cuatro y un número de tractores de 280, así como gran número de maquinaria de las variadas clases, siendo el resto de la Comarca sobre todo la primera zona descrita de similares características. La agricultura ha introducido las técnicas más avanzadas, destacando en este sentido las plantaciones de frutales de las más variadas especies , con tratamientos adecuados y modernos. La ganadería es igualmente de gran importancia en las especies de vacuno, porcino y avícola, existiendo diseminadas solamente en el Término de Tamarite un número de granjas que se aproximan a las 150. Su industria si bien no reviste la importancia de la agricultura, se encuentra en un momento esperanzador y de desarrollo, siendo numerosas las transformaciones de productos agrícolas así como de otras ramas y actividades sin descartar la posibilidad de un fuerte despegue como ha sucedido en algún punto próximo a la comarca de Tamarite.

## SITUACIÓN Y COMUNICACIONES

---

Tamarite de Litera y su Comarca está en el extremo oriental de la Provincia de Huesca, lindando al Norte con el Juzgado Comarcal de Benabarre, Sur con el de Fraga,

Este con el de Balaguer (Lérida) y Oeste con el de Barbastro.

Tomando como punto de referencia Tamarite la comarca dista de Huesca capital 94 kilómetros y de Lérida capital 40 kilómetros.

Consecuencia de esta situación es que las comunicaciones o medios de transporte estan orientados en su mayoría hacia Lérida capital, donde por razones de proximidad o menor distancia son frecuentes los desplazamientos por motivos comerciales, siendo varios los autocares que diariamente parten hacia dicha capital desde la comarca, a parte el ferrocarril Zaragoza-Lérida que la atraviesa.

Por el contrario no existen comunicaciones directas con las restantes comarcas limítrofes a excepción de Benabarre, pues con Barbastro es necesario realizar transbodo durante el recorrido para empalmar con la línea de autocares Huesca-Lérida y con Fraga no hay comunicación al quedar apartada de las comunicaciones en dirección a Lérida.

#### **TAMARITE DE LITERA CABECERA DE COMARCA**

Por resolución del Consejo de Ministros adoptada en reunión de fecha 11 de junio de 1971, se designa Tamarite como cabecera de Comarca a efectos de previsiones de comercialización y realización de la política del Gobierno de impulsión del desarrollo y concentración de servicios en aquellos puntos que por su actividad y vitalidad económica se prevé que en el futuro deberán ser centros de atracción. Esta designación ha sido corroborada en resolución del propio Consejo de Ministros en el año actual.

#### **INCONGRUENCIA QUE SE ORIGINARIAN CON LA SUPRESIÓN**

Deliberadamente hemos seguido este orden en la exposición transcribiendo en un principio los textos legales aplicables y a continuación la realidad presente de la Comarca de Tamarite de Litera con el fin de contrastarlas y deducir las conclusiones que de ello se derivan.

1º.- Mientras la Ley de Bases de la Justicia Municipal establece en su Base 1ª que no se podrán agrupar en una misma comarca Municipios cuya suma de habitantes supere los 20.000 y solo excepcionalmente se llegará a esta cifra, recomendándose como agrupación ideal aquella que no rebase las 10.000 personas, la Comarca de Tamarite de Litera dio en el censo de 1970 un total de 23.262 habitantes, superior a la máxima autorizada en dicha Ley y naturalmente a la idea recomendada en la misma, sin que, como ha sido expuesto, el proceso evolutivo demográfico sea decreciente sino más bien de aumento o en todo caso estable.

2º.- Si la resolución del expediente iniciado fuese de supresión la comarca de Tamarite de Litera, que no podría quedar sin esta rama de la Administración de Justicia, sería, como es natural, agregada a alguno de los Juzgados Comarcales limítrofes, pero nos preguntamos ¿con cual ...?. Ya hemos expuesto los deficientes y en algún caso carentes medios de transporte público, así como las grandes distancias existentes con todos los lindantes (Barbastro, Fraga y Benabarre), a parte de que con la agregación a cualquiera de ellos, exceptuando Benabarre por considerarlo totalmente improcedente, se haría que todos ellos sobrepasaran la cifra tope autorizada, si es que no la superan en estos momentos, en cuyo caso el problema se agravaría más.

3º.- La medida estaría en desacuerdo con la política del Gobierno que pretende potenciar a Tamarite de Litera declarándola Cabecera de Comarca, mientras se hacía desaparecer uno de los servicios más esenciales del Estado en su modalidad comarcal.

4º.- Tenemos entendido que el movimiento existente en el Juzgado de la Comarca de Tamarite no es de los más bajos de la Provincia, con la agravante de que, si es cierta la próxima supresión del de Benabarre, una gran parte de la Provincia de Huesca no dispondrá de éste servicio..

Es comprensible y acertado el carácter abierto de nuestra legislación es la distribución del territorio en comarcas a efectos de la Administración de justicia y



encomiable la labor desarrollada por el Ministerio desde el momento de la promulgación de la Ley de Bases de la Justicia Municipal, adaptando la distribución de sus órganos a las evoluciones demográficas experimentadas principalmente en la década de los sesenta en todo el territorio Nacional, creando nuevos Juzgados allí donde la población se concentraba en grandes núcleos y suprimiendo aquellos que habían cambiado las circunstancias existentes en el principio que lo justificaban. Mas esto no es el caso de Tamarite de Litera y su comarca donde tanto las condiciones demográficas como su red de comunicaciones y medios de transporte nacidos de forma espontánea han evolucionado en sentido favorable para su conservación.

Este Ayuntamiento, con el único objeto de servir al Estado en una de sus principales misiones dentro de la sociedad y tratando de colaborar en conseguir una acertada y conveniente prestación del servicio, soslayando de la misma cualquier consideración de tipo económico, como público y elemental servicio, que lo es, emite este informe con la esperanza de que las razones expuestas serán consideradas, y en consecuencia, por bien de la justicia, de la sociedad y de los propios ciudadanos de la Comarca de Tamarite de Litera a quienes en definitiva va dirigido el servicio, no se llevará a cabo la supresión del Juzgado Comarcal de Tamarite de Litera, procediéndose al archivo del expediente iniciado o dictando resolución favorable a su conservación.

Tamarite de Litera, a 14 de Noviembre de 1974.

EL ALCALDE.

[1.Sello institucional]

### **ANEXO DOCUMENTAL Nº 3.**

Abreviaturas empleadas:

ADPH = Archivo Diputación Provincial de Huesca.

DPH = Diputación Provincial de Huesca.

3

Huesca, 29 de noviembre de 1974

**INFORME DESFAVORABLE DPH ANTE LA POSIBLE SUSPENSIÓN DEL JUZGADO COMARCAL DE TAMARITE DE LITERA.**

ADPH. Objeto: Supresión comarcal Tamarite de Litera. Idem Sariñena / Negociado: Gobernación / Número 6656 / Clase : Agrupaciones / Signatura 257/3.

#### **EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA**

Sección Ordinaria de 29 de noviembre de 1974

De conformidad con el informe de la Comisión de Gobierno y por una unanimidad se acordó:

Informar desfavorablemente el acuerdo de incación del expediente para la supresión de los Juzgados comarcales de Sariñena y Tamarite de Litera por indicación de la Dirección General de Justicia, por cuanto y conforme a la Base 1ª de la Ley de 19 de Julio de 1944 y decreto de 8 de Noviembre del mismo año, persisten las circunstancias que dieron lugar a la creación de ambos Juzgados, y aun, y por lo que respecta a comunicaciones, población y niveles agrícola e industrial, actividad y desarrollo en general, dichas circunstancias son ahora mucho más favorables.

EL SECRETARIO GENERAL.

#### **ANEXO DOCUMENTAL N° 4.**

Abreviaturas empleadas:

ADPH = Archivo Diputación Provincial de Huesca.

DPH = Diputación Provincial de Huesca.

4

Huesca, 29 de octubre de 1981

ACUERDO ADOPTADO POR LA DPH ACERCA DE LAS VARIACIONES EN LA ACTUAL DEMARCACIÓN JUDICIAL DE LA PROVINCIA.

ADPH. Objeto: Escrito Colegio Abogados sobre variaciones de la provincia /  
Negociado: Gobernación / Número 95466 / Clase : Indeterminado / Signatura 2437/48

#### **EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE HUESCA**

Sección Ordinaria de 29 de octubre de 1981

De conformidad con el informe de la Comisión de Gobierno y por una unanimidad se acordó:

Dada cuenta de las conclusiones relativas a modificaciones de la demarcación judicial en la Provincia de Huesca, contenidas en la memoria sobre el estado de actividades de la justicia presentada por el Consejo General del Poder Judicial, que suponen la amortización de una plaza de magistrado en la Audiencia Provincial y la supresión del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Boltaña y de los Juzgados de Distrito de Sariñena y Tamarite de Litera y conocido el escrito del Ilustre Colegio de Abogados de Huesca por el que se defiende el mantenimiento de dichos Juzgados y su mejora, dirigir escritos al Consejo General del Poder Judicial, Audiencia Territorial de Zaragoza y Ministerio de Justicia, exponeindo la inquietud de esta Corporación por los problemas que plantea la desaparición de servicios de la Administración de Justicia en la Provincia y la necesidad de que se mantengan las actuales dotaciones de la Administración de Justicia, mejorándolas en personal y medios materiales suficientes para lograr la alta misión que tienen encomendada.

**EL SECRETARIO GENERAL.**

## ANEXO DOCUMENTAL Nº 5.

Abreviaturas empleadas:

AATL = Archivo del Ayuntamiento de Tamarite de Litera (Huesca).

5

Tamarite de Litera, 17 de agosto de  
1.984

ESCRITO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE TAMARITE DE LITERA, SESIÓN 27/06/1986 DE FLORENCIO NADAL ESCALONA –ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE TAMARITE– DIRIGIDO A LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN, PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN TAMARITE DE LITERA.

AATL, EXPEDIENTE SOBRE REIVINDICACION DE JUGZADO DE DISTRITO DE TAMARITE DE LITERA EN JUZGADO DE 1ª INSTACIONA. DOCUMENTACION DE LOS 14 MUNICIPIOS QUE FORMAN LA COMARCA Y FIRMAS RECOGIDAS [Signatura 787/7].

*1.Encabezado Institucional del Ayuntamiento de Tamarite de Litera ( Huesca).*

*2.Sello Institucional de la Ayuntamiento de Tamarite de Litera( Huesca) junto con la firma del Alcalde.*

*3.Sello Institucional del Ayuntamitno de Tamarite de Litera ( Huesca).*

[1. Encabezado institucional]

Florencio Nadal Escalona, Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Tamarite de Litera actuando en representación de la Corporación Municipal que preside en virtud del acuerdo plenario adoptado en la sesión ordinaria de 27 de junio ante V.E. comparece y atentamente expone:

Que ante los rumores que se están extendiendo sobre la posible supresión de los Juzgados de Distrito, este Ayuntamiento eleva el presente escrito en súplica de que sea restablecido el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción suprimido en 1965, acudiendo para ello los siguientes razonamientos:

1.-El actual Juzgado de Distrito y antes de 1ª Instancia e Instrucción, tiene su jurisdicción sobre los 16 municipios o Juzgados de Paz que se relacionan seguidamente con expresión de su Nº de habitantes y de su superficie:

Tabla 1.

	<u>Habitantes</u> -----	<u>Superficie</u>
Albelda	1.162	5.170
Alcampel	1.272	5.780
Almunia de San Juan	816	3.550
Altorricón	1.660	3.200
Binéfar	7.767	2.500
S. Esteban de Litera	846	7.180
Tamarite de Litera	4.274	11.090
Azanuy	310	5.110
Baells	226	4.000
Baldellou	207	3.040
Camporrells	374	2.670
Castillonroy	465	3.750
Estada	252	1.590
Estadilla	1.120	5.020
Estopiñan	219	8.870
Peralta de Calasanz	592	11.490
-----		
TOTALES	21.562	84.010

Como se puede comprobar en cualquiera de los estudios socio económicos efectuados por los organismos provinciales y regionales y especialmente por el programa Económico para Aragón aprobado por las Cortes Aragonesas con vigencia en el periodo 1.984 y 1.987 y en el Estudio Territorial de nuestra región se ha dividido el territorio en 25 bases espaciales de referencia, que sin tener en consideración de una institucionalización comarcal, al haberse tenido en cuenta en su definición y delimitación muy diversas variables ( población, homogeneidad de las actividades económicas, polarización de los diferentes núcleos, accesibilidad, etc..) les confieren un carácter funcional muy adecuado para la programación de acciones.

Entre tantas bases espaciales o comarcas se halla la señalada con el Nº 6 a la que denominan La Litera y que comprende todos los municipios antes enumerados a excepción de Estada, Estadilla y Almunia de San Juan que por su proximidad a Barbastro – Monzón, Y en cambio le agregan el municipio de Esplús con 1.621 habitantes y una superficie de 8.350 Km<sup>2</sup> que actualmente pertenece a Fraga, pero que por su lejanía con la misma que todas sus relaciones las tiene con Binéfar y la Litera.

2.-No parece pueda ofrecer duda alguna la capitalidad de la Comarca que desde tiempo inmemorial ha recaído en Tamarite de Litera, no solamente por ser el centro geográfico y por tanto el más equidistante entre todos los municipios que comprenden la comarca sino también porque radiquen en el mismo de los siguientes entonces de carácter comarcal.

- a) Registro de la Propiedad que comprende todos los municipios antes reseñados.
- b) Recaudación de Contribuciones del Estado que abarca además de los municipios antes indicados la mayor parte de los de Ribagorza.
- c) Servicio de extensión Agraria que sirve a la mitad oriental de la Litera.
- d) Tamarite de Litera ha sido designado por el Insalud para sede de uno de los Centros preventivos de la Salud de carácter Comarcal en donde se va a construir de inmediato el edificio que albergará dichos Servicios y que se extenderá sus

servicios a toda la Comarca de la Litera.

- e) En estos días se ha firmado en esta villa con la Diputación de Aragón un convenio por el cual se ha establecido el servicio social de Base para la comarca de la Litera con dos Asistentes sociales que residirán una de ellas en Tamarite y la otra en Binéfar.
- f) Para servicio de la Zona Oriental de la Litera existen, en primer lugar, un Instituto de Bachillerato unificado y polivalente, en el que como único caso en todo Aragón se está experimentado desde el pasado curso las nuevas enseñanzas conjuntas del Bachillerato y F.P..

También imparte sus enseñanzas un centro de F.P. y Otro de E.G.B. todos

de carácter comarcal.

- g) Y por último se acaba de construir una Residencia para personas de 3ª Edad con capacidad para 50 residentes de la comarca.  
Se celebra en Tamarite un mercado semanal al que afluyen en gran cantidad de gentes de los pueblos de la comarca.

3.-Se puede comprobar perfectamente que el hecho suprimir los Juzgados de 1ª Instancia de esta villa y del colindante de Benabarre no ha supuesto la desaparición de las dos comarcas como tales entes perfectamente diferenciadas ni ha logrado que los habitantes de La Litera se acerquen a Barbastro para otras finalidades que no sean la judicial y ni aun siquiera para estos fines, pues en los contratos civiles y demás es frecuente que se fijen los Tribunales de Lérida para dirimir los conflictos o diferencias que puedan sustanciarse.

Es decir, fue una incorporación o absorción forzada y lo sigue siendo en la actualidad.

4.- la comarca de la Litera tendrá dos zonas perfectamente diferenciadas, aunque esta circunstancia no disminuya en nada su carácter de comarca definida por elementos naturales. Estas dos zonas están motivadas por la configuración del terreno y especialmente por estar atravesada de Oeste a Este por el Canal de Aragón y Cataluña, primitivamente denominado de Tamarite, habiendo aparecido al Sur del mismo una amplia y fértil huerta destinada a los cultivos clásicos del regadío, alfalfa, maíz, girasoles, etc. y bastante proporción al de árboles frutales, manzana, pera y melocotón, explotados con las técnicas más avanzadas.

En la zona septentrional, aunque existen regadíos procedentes de manantiales más o menos importantes, en su mayoría está compuesta por tierras de secano y monte bajo una de las zonas. Es la primera que comprende los municipios de Albelda, Tamarite, Altorricón, Alcámpel, Binéfar y San Esteban de Litera su población en conjunto ha experimentado aumento, incluso en la década de los sesenta que fueran los años críticos del gran éxodo de los habitantes de los pueblos a las ciudades. La segunda, compuesta por el resto de los municipios, sufrió durante dicho periodo un fuerte descenso de su población habiendo entrado en estos últimos años en periodo de estabilización.

En conjunto la población total que comprende el total Juzgado de Distrito ha aumentado en población a principios de siglo, según el P.E.R. habiendo pasado de 18.418 habitantes en 1.900 a los 20.860 de 1.981.

Es de prever que la población de La Litera en su conjunto aumente, teniendo en cuenta el espíritu empresarial de la mayor parte de los agricultores y ganaderos de la comarca que les está impulsando a realizar cuantiosas inversiones en sus exportaciones, tanto en las agrícolas como en las ganaderas. Las mejores y más avanzadas técnicas están siendo utilizadas por sus habitantes. y lo mismo ocurre con los Ayuntamientos que rigen tales municipios, que en los últimos años han llevado a cabo importantes obras de infraestructura y cuentan con todos los servicios que la época en que vivimos exige.

6.- La comarca de La Litera no puede ser dirigida ni controlada desde fuera de ella. Lo mismo que ha ocurrido actualmente en que como se ha indicado el juzgado de 1ª Instancia de Barbastro no ha logrado que se sintiera unida a su Comarca ocurriría si por ejemplo se crea, como la prensa ha publicado un Juzgado en Monzón y se decide que La Litera quede adscrita al mismo.

7.- Téngase en cuenta por otra parte que en la mayor parte de sus municipios se habla el literano que según dictamino la Real Academia de la Lengua es una variante dialectal del catalán. Ello hace que el temperamento el carácter de los literanos sea en cierto modo distinto a los ciudadanos de Barbastro o de Monzón. Las relaciones son muy estrechas con la ciudad de Lleida con la que se está perfectamente comunicada, teniendo por ejemplo Tamarite cuatro servicios de autocar diarios. La economía tanto agrícola como ganadera e incluso industrial se relacionan en su mayor parte con los catalanes.

Precisamente esa especie de postergación que durante muchos años ha sufrido la Litera junto con una visión errónea del Fisco provincial en pasadas décadas que al fijar la cuantía de los tributos actuaba como si esta comarca nadara en la opulencia ha servido para fomentar el descontento en una pequeña minoría que está empeñada en que La Litera pase a formar parte de Cataluña. Minoría muy numerosa, pero si extraordinariamente activa.

Sin duda la decisión de la Diputación General de Aragón apoyando nuestro dialecto y fijando normas para su aprendizaje optativo servirá para dar a comprender a esta minoritaria facción que lo mismo ocurre con Alsacia e incluso en la Subía bárbara no hay contradicción algún ente la lengua que se habla y el sentimiento aragonés que anima a la inmensa mayoría de los literanos.

Volver a situar en Tamarite el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción sería alcanzar uno de los hitos más importantes en el difícil camino de conseguir para la Litera los servicios que toda la comunidad requiere, entre lo que lógicamente destaca el de la Administración de Justicia. La circunstancia de ser esta comarca fronteriza con Cataluña y la de que un buen porcentaje de los nacidos estén trabajando y hayan fijado su residencia en tierras catalanas, pero si también aspectos a tener en cuenta para demostrar que el hecho de estar muy alejados tanto de la capitalidad de la provincia como de la Comunidad Autónoma no es obstáculo para disfrutar de unos servicios eficientes.

En virtud de lo expuesto a V.E.  
Suplico se digne transformar el actual Juzgado de Distrito con sede en esta villa, en

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción con jurisdicción en todos los municipios que comprende la Comarca de la Litera y que según el programa económico para Aragón 1.984/87 y la publicación de Aragón en cifras del Servicio de Documentación de Economía aragonesa son los siguientes: Albelda, Alcampel, Altorricón, Azanuy- Alins, Baells, Baldellou , Binéfar, Camporrells, Castillonroy, Esplús, Estopiñán del Catillo, Peralta de Calasanz, San Esteban de Litera y Tamarite de Litera.

Tamarite de Litera, 14 agosto de 1.984.

[2.Sello Institucional]

Como se desprende del adjunto escrito el Ayuntamiento Pleno en su sesión de 27-06-84, acordó elevarlo a la superioridad a fin de que sea restablecido el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción que se suprimió en el año 1.965, sobre todo al haberse enterado por la presenta de que se pretende suprimir los actuales Juzgados de Distrito.

Aunque, efectivamente la Administración de Justicia es competencia reservada del Estado según el art. 149-5º de la Constitución es preceptiva la decisión que adopte esa Diputación General a tenor de lo que dispone el art ° 32-1-b del Estatuto de Aragón que dice: “Fijar los límites de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales de Aragón fijando de su capitalidad”.

Atendiendo a tales circunstancias se eleva como se ha indicado este escrito a través de esa Diputación General por si tiene a bien informarlo en sentido favorable.

Como puede comprobarse se solicita que el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción sea nuevamente instaurado en la Litera, comprendiendo casi las mismas localidades sobre las que tenía jurisdicción en 1.965 y sobre las que tiene el actual Juzgado de Distrito, con una pequeña variación; se desprenden los municipios de Estada y Estadilla que deberán pasar por su proximidad geográfica a Barbastro y el de La Almunia de San Juan por la misma razón a Monzón si es que se crea allí un nuevo Juzgado o en su defecto a Barbastro. En cambio, se incorpora a la comarca el municipio de Esplús actualmente perteneciente a Fraga, pero adscrito por su proximidad geográfica y por sus relaciones con Binéfar a la Litera, según es de ver en todos los estudios realizados por esa Diputación General y especialmente en la publicación Aragón en cifras del Servicio de Documentación de Economía Aragonesa.

No estima necesario repetir los argumentos que en el referido escrito se relacionan.

Si acaso se resalta esa circunstancia de existir en la comarca una minoría pan catalanista que está haciendo campaña para convencer a sus habitantes de ser catalanes. Es de desatar que no ocurre lo mismo en las otras comarcas de la franja oriental de Aragón o al menos con la virulencia y numero de los que operan por estas tierras.

Se estima que si se van estableciendo unos servicios eficientes, como son sin duda el Servicio Social de Base, el de la Residencia Comarcal de Ancianos, los de Enseñanza primaria y superior, juntamente con la enseñanza optativa del catalán adaptada a las modalidades de nuestro dialecto y se llegar a restablecer la Administración de Justicia en su integridad, se lograría acallar esas voces discordantes, que hasta la fecha es digno resaltar, ha hecho poca mella en el sentir aragonés de la comarca.



Por todo ello se suplica esa Excma. Diputación General se digne informar en sentido favorable el referido escrito y hacer ver al Organismo competente que lo que la Litera necesita es una Administración de Justicia completa para que pueda actúa desde la misma comarca con la eficacia y eficiencia que tan alta misión exige.

Tamarite de Litera, 17 de agosto de 1.984.  
[3. Sello institucional]

## ANEXO DOCUMENTAL Nº 6.

Abreviaturas empleadas:

AAB = Archivo del Ayuntamiento de Baldellou ( Huesca).

6

Tamarite de Litera, 20 de diciembre de 1958.

SUPERVISIÓN DEL JUZGADO DE TAMARITE A LOS JUZGADOS DE PAZ DE SU DISTRITO.  
CORRESPONDENCIA JUZGADO DE PAZ BALDELLOU Y JUZGADO MUNICIPAL DE TAMARITE.  
AÑOS 1957-58.

AAB. Carpeta Juzgado.

*1.Encabezado Institucional del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tamarite de Litera.*

*2.Sello Institucional del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tamarite de Litera junto con la firma del Juez.*

[1.Encabezado Institucional]

Por haberlo acordado así el Sr. Juez de 1ª Instancia de este partido en Providencia del día de hoy, dirijo a V. la presente para comunicarle la orden de la Dirección General de los Registros y del Notariado, recibida por conducto del Excmo. Sr. presidente de la Audiencia Territorial que literalmente dice así:

“Ruego Vuecencia se sirva comunicar Jueces encargados de Registros Civiles por mediación Jueces 1ª Instancia, que Ley Registro Civil 8 Junio 1957 Boletín Oficial 10 mismo mes y año, y Reglamento 14 Noviembre actual, Boletín oficial 11 diciembre mismo año, entrara en vigor primero Enero 1959”.

De la presente acusará recibo a este Juzgado, dándose por enterado.

Dios guarde a V. muchos años.

Tamarite a 20 de Diciembre de 1958.

[2.Sello Institucional]

## ANEXO DOCUMENTAL Nº 7.

Abreviaturas empleadas:

AATL = Archivo del Ayuntamiento de Tamarite de Litera (Huesca).

7

Zaragoza, 21 de Julio de 1.9

ESTUDIO ELABORADO POR EL ABOGADO JOSÉ DUFOL ABAD FUNDAMENTANDO LA REIVINDICACIÓN DE UN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN TAMARITE DE LITERA.

AATL, EXPEDIENTE-DOSIER SOBRE EL JUZGADO:REIVINDICACION DE JUZGADO DE DISTRITO DE TAMARITE DE LITERA EN JUZGADO DE 1ª INSTANCIA. DOCUMENTACION DE LOS 14 MUNICIPIOS QUE FORMAN LA COMARCA DE LA LITERA [Signatura 787/6].

*1.Firma el autor del estudio y abogado Jose Dufol Abad.*

*2.Firma el autor del estudio y abogado Jose Dufol Abad y adjunta su numero de colegiado.*

Zaragoza, 21 de Julio de 1.988.

Sr. D. FLORENCIO NADAL ESCALONA  
Alcalde -presidente del Ayuntamiento  
TAMARITE DE LITERA.

Estimado Sr. Alcalde:

Con la presente hago envío del estudio que me fue encargado para el que, pese a la presura del tiempo disponible, he procurado acopiar cuantos datos hemos podido allegar.

Como verá, el estudio tiene tres partes muy definidas: La primera de ellas está encaminada según la anticipé a la necesidad de cohonestar la realidad de la Comarca que, a buen seguro, tendrá el tratamiento debido en la nueva conformación del territorio aragonés, y la “comarcalización” de la organización territorial judicial. Una segunda parte en la que se trata de demostrar que la convertir en Partido Judicial la Comarca no se violenta la aplicación de los principios inspiradores del Proyecto ni la de los módulos de distribución que le propio Proyecto de Ley prevé. Por último, una tercera parte en la que he tratado de recoger su sentir al respecto.

Así como las dos primeras tienen un sentido jurídico de interpretación legal, la tercera hace referencia más bien a criterios de oportunidad social y política por lo que, con mayor conocimiento de causa podrán Vds. Ampliarlos, modificar sus expresiones o alterarlos a su convivencia.

Ignoro el trámite que Vds. piensan darle a la solicitud por lo que he huido de darle condición alguna especial para que, cualquiera que sea, pueda ser aprovechado cuanto en el escrito se razona.

Espero que les sea de utilidad el esfuerzo que hemos realizado y quedo en espera de sus noticias.

Atentamente y a su disposición.

[1.Firma el autor del documento]

P.D.: He tomado de las notas, cartas y demás los datos que se citan. No ha habido tiempo para cotejarlos. Si en alguno de ellos hay error, le ruego que lo ratifiquen. Convendría, en su caso, acompañar gráficos explicativos.

### **NOTAS PARA FUNDAMENTAR LA REIVINDICACION DE UN JUZGADO EN TAMARITE DE LITERA.**

I.-El Proyecto de Ley de Demarcación y Planta Judicial, responde, según su Preámbulo a la necesidad de llevar a cabo el desarrollo organizativo de los diversos órdenes judiciales de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial cuya Disposición Adicional Primera ordenó al Gobierno de la Nación la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley correspondiente.

De tal desarrollo organizativo interesa a nuestro caso fundamentalmente lo que a la Distribución territorial de la Planta de órganos judiciales atañe.

Con fundamento último en el Art. 24 de la Constitución Española que consagra el derecho a la “tutela efectiva” de los Jueces y Tribunales, entiende el Proyecto que, para que se vea cumplida tal exigencia Constitucional, la pretendida Organización deberá dirigirse, en primer lugar, a garantizar el fácil acceso de los intereses legítimos de los ciudadanos a los Juzgados, y, en segundo lugar, a la necesidad de evitar una dispersión excesiva de medios.

En consonancia con tales fines los autores del Proyecto dejan constancia de la real existencia de constantes de las que hay que partir; una de ellas es la “tendencia a la concentración” y la otra “la tendencia general a la comarcalización de servicios”.

Cuanto se lleva dicho corresponde al Preámbulo de la Ley en el que, además se contemplan como criterios de orientación cuantitativa, los tres siguientes:

- a) Un mínimo deseable de 50.000 habitantes para sustentar una circunscripción
- b) Una superficie de 700 a 1.000km de un radio de 15 km de Radio por entender que esta es una distancia fácilmente superable.
- c) Un número “ideal” de 25.000 habitantes en proporción a cada Juzgado.
- d) El volumen posible de litigiosidad, las comunicaciones y las características orográficas y comarcales.

II.- Sobre tales Bases, examinaremos a continuación las circunstancias de todo orden que concurren en la COMARCA DE LA LITERA O LLITERA, circunstancias que entendemos, se corresponden con los principios inspiradores del Proyecto de Ley.

Nos referimos, en primer lugar, a la “tendencia general a la comarcalización” principio que no puede estar referido como aspiración nueva al establecimiento de una

Jurisdicción meramente zonal, porque según hemos visto, se hace a las “características comarcales” obliga a incardinar el citado principio en el más veraz y real de Comarca Natural. En definitiva, lo que la Ley pretende es no perder de vista la nueva organización comarcal a que estamos abogados en todos los órdenes de servicios.

La examinada tendencia ha sido , y es hoy con mayor fuerza, tras la institucionalización de la Autonomía en las Comunidades, camino de ineludible recorrido, que tiene su indudable precedente en la espontaneidad organizativa de los territorios que presidio históricamente su división; cuentan las Comarcas con un fuerte arraigo por razones puramente objetivas de vertebración y coherencia, pues no son, en definitiva, sino unidades físicas y geográficas origen de una común tradición aglutinante de fuerzas económicas, sociales y culturales.

Tal realidad no ha sido desconocida, ni por la doctrina, ni por el Legislador. Sin embargo, que la Comarca no haya alcanzado el ansiado nivel preconizado ha sido debido (y en ello están conformes todos los autores) a que la legislación sectorial se ha desconectado de su concepto unitario y , con criterios, referidos al propósito inmediato de lo legislado en cada caso, ha hecho surgir circunscripción variadas, no coincidentes y, por ello, con notables disfunciones que han dificultado continuamente la coherencia prestación de servicios.

La doctrina ha expuesto frecuentemente, tomando lo de la realidad, el cumulo de dificultades que puede resultar de la falta de previsión en los ordenamientos comarcales. Así Llorente Martínez (La Comarca en la restructuración del territorio. La experiencia en la tierra de Campos), señala las siguientes en un solo plan:

La Comarca del Servicio de Extensión Agraria fue anterior y distinta a la programada en el Plan; el servicio de orientación rural superaba en un 30% la superficie del Plan; el I.N.C., al realizar los regadíos actuó sobre una delimitación distinta de la del Plan; las Unidades Comarcales fijadas por el Ministerio de Educación y Ciencia para la Enseñanza Primaria son distintas de las citadas y otro tanto ocurría con las comarcas fijadas por la Dirección General de Sanidad.

En igual dirección, otros autores (Díez González “Valoración político administrativa del concepto de Comarca. Rev.. Est., Vida Local) llegan a calificar como “ arbitraria y discorde malla psedo- comarcal”, la situación derivada de las distintas áreas comarcales estructuradas por cada uno de los Departamentos Ministeriales intervinientes, divisiones “ especiales” que, por no responder a un criterio funcional coherente, dispersaban la localización de los servicios y obligadamente los desplazamientos personales de los interesados ( evitar la dispersión es también preocupación del Proyecto de Ley), con notorio olvido de la “eficacia”, primera condición constitucional y va recogida en el Art. 29.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

También en la misma alinea de pensamiento SANCHEZ BLANCO ( La Comarca como factor de coherencia regional ) advierte de “ las consecuencias negativas para la acción administrativa - in genere- significaba el dato de que los distintos Departamentos Ministeriales tomarán como referencia en su actuación distintas

unidades comarcales, sin olvidar los resultados negativos que tal situación ha dejado sentir sobre el ámbito rural”

III.- La denominada por el Proyecto en su Preámbulo “Tendencia general en la comarcalización de los servicios” ha sido acogida ya en la legislación General a partir de los Arts. 141.3 y 152.3 de la Constitución Española, y, así el Art. 3.3.b) de la Ley de Bases para el Régimen Local 7/81 de 2 de Abril define como Entidad Local de las incluidas en su regulación a las COMARCAS y difiere la competencia para su erección a las Comunidades Autónomas; igualmente el Art. 42.1 define las Comarcas como agrupación de varios Municipios “cuyas características determinen los intereses comunes precisados de una gestión propia o demanden la prestación de servicios en dicho ámbito”; a las Leyes Autonómicas se atribuye la determinación de su ámbito territorial; el texto refundido de disposiciones vigentes sobre Régimen Local dedica todo un capítulo a la Mancomunidad de Municipios y el R.D. de Organización y Servicios de 28 de Noviembre de 1.989 consagra igualmente a la Comarca como Entidad Local Territorial.

En la Legislación General son muchas las disposiciones (concentración parcelaria, Enseñanza, Sanidad, etc.) que responden a esa “general tendencia”.

Los Estatutos de Autonomía acogen con claridad a la Comarca como demarcación territorial (Asturias Art. 6º.1; Cantabria Art. 36; Rioja Art. 5; Murcia Art. 3º; Valencia Art. 46; Castilla la Mancha art. 29 etc.) e incluso en la materia que nos ocupa se atribuye la competencia para fijar los límites de las demarcaciones judiciales a las C.C.A.C. (Asturias Art. 41.2; Andalucía Art. 52.2; Cantabria Art. 43; Valencia Art. 29; Castilla la Mancha etc.). En lo que hace referencia al Estatuto de Aragón, su Art. 5º recoge la Comarca como circunscripción territorial y su Art. 32 atribuye a la Comunidad Autónoma competencia para “fijar los límites de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales de Aragón localizando su capitalidad”.

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 40/81 de 28 de Julio, admite, con la salvedad del respeto a la Provincia, la creación de agrupación de Municipios “con clara voluntad autonómica que actúen como divisiones territoriales de la Comunidad Autónoma”.

IV.- Resulta evidente que la tendencia general hacia la comarcalización resulta irreversible y cierta, pero no lo es menos que si, en definitiva, se ha de llegar a la erección de la Comarca como Ente Territorial en el marco del cual se desenvuelva la acción política y Administrativa integradora de unidades municipales interdependientes y, por supuesto, como unidad territorial requerida para la efectividad de la política del Estado en todos sus órdenes, se hace absolutamente necesario que, llegado el momento de su reconocimiento formal como tal Ente, no existían condiciones que hayan desconocido su preexistencia ni constituyen, por si un grave ataque a la certidumbre de su personalidad aglutinante. Porque ¿qué suerte de ente comarcal declarado como tal, será aquel en el que sus comarcas hayan obligadamente de acudir a otras comarcas para la obtención de servicios fundamentales? En el orden puro de la prestación de servicios la falta de inmediatividad vaciaría de contenido real propio a la Comarca; en el orden político, en el que las comarcas se muestran con especial susceptibilidad, sobre todo en los casos de las colindantes con otras Comunidades Autónomas, como es el caso de La Litera, causa permanente de inquietud, la falta de reconocimiento de su

Comarca sería fuente de agravación de los problemas ya existentes.

La Litera o Llitera es, además, Comarca de acusada personalidad y el reconocimiento de su presencia es pacífico y continuado; por otra parte, su delimitación no deja lugar a dudas. Así, de modo continuo, ha venido siendo definida en la Geografía política y Económica de Aragón como Comarca particularmente aceptada. Desde Javier de Burgos que respetó su unidad (no así la del Bajo Aragón), hasta la fecha, no han existido discrepancias respecto de la condición Comarcal de La Litera. Los profesores A. Bielza y J. Gutiérrez (1988), tal y como lo expone haciéndolo suyo el Profesor Bermejo en sus Comentarios al Estatuto de Aragón (Inst. Est. Adm. Local), recoge la Comarca y cita como núcleos importantes que la conforman a Binefar, Tamarite de Litera, Altorricón, Esplús, Alcampel y Albelda con un total superior a los 20.000 habitantes con tendencia al crecimiento (ha sobrepasado los 26 h/ km<sup>2</sup>). En la publicación de "Aragón en cifras" del Servicio de Documentación de Economía Aragonesa y en el Programa Económico e la Diputación General aparece la Comarca de la Litera formada por 14 municipios que son: Albelda, Alcampel, Altorricón, Azanuy-Alins, Baells, Baldellou, Binefar, Camporrells, Esplús, Estopiñán del Castillo, Peralta de Calasanz, San Esteban de Litera y Tamarite de Litera, los Ayuntamientos de todos los cuales han manifestado reiteradamente su vocación comarcal. La planta judicial vino reconociéndola en cierto modo, creando un Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción en Tamarite de Litera, si bien prescindía inexplicablemente de Esplús y extendía su jurisdicción a Estada, Estadilla y La Almunia de San Juan naturalmente insertos en la Comarca Barbastro -Monzón. Tal vocación ha comenzado a tener feliz realidad con la culminación, iniciada ya en 1.984, de la creación de la Mancomunidad intermunicipal a cuya formación acudieron unánimemente los catorce municipios afectados; cuantas iniciativas se están llevando a cabo lo han sido con la misma y manifiesta vocación comarcal.

En Tamarite se asientan el Servicio de Recaudación de la Zona; el Servicio de Extensión Agriaria; ha quedado ubicado un Centro Preventivo Comarcal de Salud; el Servicio igualmente Comarcal de Base; un mercado semanal convoca a gran número de comarcasos manteniéndose viva su necesidad actual. La población de la Litera se ha mostrado asequible a los cambios observados en los últimos tiempos en la técnica de los cultivos agrícolas y ganaderos y, el desarrollo de tales técnicas, ha permitido instalar Centrales hortofrutícolas en Binefar, Tamarite y Altorricón. Fábricas de Piensos en toda la zona de regadío y se ha llevado en total cooperación la fuerza eléctrica a las fincas rurales. En el aspecto industrial es de destacar la de importantes Fundiciones en Binefar, Tamarite y Alcampel; Talleres de construcción maquinaria agrícola; y de la mayor importancia ha de entenderse el funcionamiento de un matadero Industrial en Binefar, que se constituye así en Centro regulador de precios e igualmente la fábrica de concentrados de zumos en Tamarite donde se molturan diariamente 500 Tm de manzana o pera destinadas íntegramente a la exportación.

En relación con la Administración de Justicia deben anotarse: dos Notarias en Tamarite y Binefar, el Registro de la Propiedad situado en Tamarite que sirve a las catorce localidades que forman la Comarca y el número de Abogados residentes en él es de 6.

Merece una particular atención al cómputo de los asuntos ingresados en el Juzgado de distrito de Tamarite. La estadística del propio Consejo del Poder Judicial,

referida al año 1.985, refleja 61 ingresos y 26 sentencias y en asuntos criminales registraron 160 ingresos y 130 sentencias. En comparación con Fraga que solo se registró 30, con monzón que solo registro 54 asuntos civiles o incluso con Teruel que solo registro 62, es evidente que el Juzgado de Tamarite desarrollo mayor actividad; en lo Penal los 160 ingresados superaron a Barbastro que solo registro 128.

Si a ello se añade la limitación de la competencia a que se ven abocados los Juzgados de Distrito, principalmente por razón de la cuantía de los asuntos de que pueden conocer, es evidente que como tal Juzgado de distrito ha sido infravalorado pues las transacciones que se llevan a cabo en la Comarca por las razones de desenvolvimiento económico que hemos señalado son de gran importancia. Es esta la razón por la que, de ordinario, se avocan a los Juzgados de Lérida, por sumisión expresa, gran cantidad de asuntos que de otro modo quedarían en el Juzgado de Tamarite, supuesta su conversión en Juzgado de Primera Instancia según prevé la Ley O. del Poder Judicial.

Por otro lado, la proximidad de Monzón donde se ubica un Juzgado facilitaría las sustituciones en caso de ausencia o falta de cobertura.

V.- Hasta aquí las razones que se exponen han estado enderezadas a fundar la necesidad de que la organización territorial, en cualquier orden y, por supuesto, en el judicial, no se constituya en un obstáculo o inconveniente para que la “tendencia general a la comarcalización de los servicios” tenga virtualidad y se funde coordinadamente en la Comarca. Igualmente hemos razonado sobre la realidad económico- social (ello sin acudir a antecedentes históricos), que la Comarca de la Litera representa.

Hemos de examinar ahora si existe inconveniente grave para el mantenimiento del Juzgado en Tamarite, supuesta su conversión en Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, vistos los módulos que el propio Proyecto de Ley maneja para su mantenimiento o desaparición.

Dice el Preámbulo de la Ley que el número “ideal” de habitantes en proporción a cada Juzgado se estima en 25.000 si bien en la vía de tal hipótesis se parte de un numero “deseable” de 50.000 habitantes. Añade el Preámbulo que, por razones de aproximación en las comunicaciones, la superficie media de las circunscripciones ha de estar comprendía entre los 700 y 1.000 Kms<sup>2</sup>, es decir a partir de unos 15 Kms de radio.

Pues bien, tales módulos, sobre todo si se examina su aplicación a la luz de los que el proyecto contiene, se dan en la medida de su vulnerabilidad en la Comarca de la Litera con mayor claridad que en a circunscripciones colindantes.

La superficie de la Comarca supera los 800 Kms<sup>2</sup>; su población supera ya los veinte mil habitantes y está en crecimiento constante y de las localidades que forman la Comarca 9 no están a distancias superiores de los 20 Kms<sup>2</sup>, de las que, cinco, no superan las doce y las más distantes como Camporrells, Azanuy o Peralta no superan los 25 kms y, en cambio quedan a más del doble de distancia de Monzón. Carece de justificación en Esplús, a 18 kms de Tamarite quede excluido en la planta actual cuando dista de Fraga a cuya circunscripción está adscrita, 44 kms.

Solo el mantenimiento del Juzgado en Tamarite con la agregación de Esplús que,



sin duda, pertenece a la Comarca como ha quedado bien de manifiesto, equilibraría tanto las superficies como el número “ideal” de habitantes y, por supuesto, de los asuntos a tramitar, ya que la circunscripción de Tamarite quedaría con 21.000 habitantes, la de Monzón agregado Binaced (que está solo 11 kms. De Monzón en tanto que a 46 de Fraga) y Fraga con otros tantos; por el contrario, agregada la Litera a la circunscripción de Monzón quedaría igual Fraga y en cambio Monzón con más de 45.000 habitantes, con una superficie desmesurada y distancias que en los casos ya citados superarían los cincuenta Kms. Como ocurre con la franja oriental donde se encuentran Estopiñán, Camporrells o Baldellou.

He aquí, pues, como, también los módulos dentro de la viabilidad admisible están claramente cumplidos en la Comarca.

VI.- Como en tantas otras ocasiones, la población total de la Comarca de la Litera se ha considerado convocada al planteamiento de la situación originada por la publicación del Proyecto de Ley de Demarcación y Planta y su Anexo, en lo que se preconiza la desaparición del Juzgado de Tamarite ( que a ello equivale su conversión en Juzgado de Paz) y, por ello, a través de sus Representantes Legítimos se ha manifestado, una y otra vez ante las más Altas Instancias del Gobierno Comunitario y Nacional en contra de tal decisión y, ello, no por un simple y aldeano espíritu conservador sino por sólidas razones de todo tipo. El esfuerzo constante que se lleva a cabo para mantener la identidad de la Comarca frente a apetencias extrañas no se vería reforzado, ciertamente, por la desaparición del Juzgado, hecho que se constituiría en un motivo más de agravio que serviría de precedente para los que vinieran después como natural consecuencia, lo que ve evidentemente, produciría daños social y políticamente irreparables.

Porque así se prevé que pueda ocurrir y, sobre todo, porque si ya existe ese espíritu comarcal, que la Ley registra como tendencia general y toda organización de tal clase requiere, no es despreciable la ocasión de consolidarlo contemplándolo desde un punto de vista fríamente estadístico. El haberlo hecho así en el pasado, ha sido fuente abundante de conflictos no resueltos todavía desde hace más de 150 años en lo Civil y cientos de años en lo religioso. Un exacerbado racionalismo que no considero ni el resultado “natural” de la espontánea manifestación de la voluntad popular, ni la realidad nacida de ella ha conducido a situaciones de conflictividad cada vez más acusadas.

Estas razones, como se ha visto, ni son únicas ni su aceptación violentaría la aplicación de los principios inspiradores del Proyecto de Ley, antes bien refuerzan su comprensión y su lógica aplicación.

De aquí que reafirmando su voluntad y deseo de obtener una resolución favorable a sus pretensiones, los Ayuntamientos de las 14 localidades que conforman la COMARCA DE LA LITERA, la Mancomunidad de los mismos Municipios, por si y por cuanto de representación de la voluntad popular suponen, DEJAN CONSTANCIA DE QUE,

PRIMERO. - Consideran vital para la COMARCA DE LA LITERA el mantenimiento del Juzgado de TAMARITE DE LITERA y su conversión en Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción según prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SEGUNDO. - Que tal consideración tiene como fundamento el reconocimiento de la identidad y realidad de la COMARCA DE LA LITERA y, consecuentemente, su conversión en Partido Judicial.

TERCERO. - Que así lo requiere el equilibrio en superficie, habitantes y volumen de litigiosidad de las cuatro circunscripciones de Barbastro. Monzón, Fraga y Tamarite de Litera que, de otro modo, y según los presupuestos del Anexo quedan manifiestamente desequilibradas con notorio arraigo comparativo.

CUARTO. - Que la búsqueda de tal equilibrio y homogeneidad sirve a la mayor eficacia del servicio sin producir otra alteración en las previsiones del ANEXO que la de situar uno de los Juzgados previstos para Barbastro en Tamarite de Litera, sin que, dada la proximidad de Monzón a Barbastro (18 kilómetros) y de Monzón a Tamarite ( 17 Kms) pueda constituirse en problema decisorio el de las sustituciones.

QUINTO. - Que tanto los Ayuntamientos como la Mancomunidad están puestos a facilitar los medios materiales necesarios para asegurar una infraestructura adecuada a las instalaciones requeridas para el normal funcionamiento del Juzgado.

[2.Firma autor estudio]

## ANEXO DOCUMENTAL N° 8.

Abreviaturas empleadas:

AAC = Archivo Ayuntamiento de Camporrells.

ASFHAN = Asociación Sindical de Funcionarios Habilitados Nacional

8

Camporrells, 12 de febrero de 1991.

CARTA ENVIADA POR ASFHAN PARA INFORMAR DE QUE SE DESCONVOCA LA HUELGA SECRETARIOS- INTERVENTORES DE LOS AYUNTAMIENTOS ARAGONESES DE MENOS DE 5.000 HABITANTES, EN PROTESTA POR LA ASUNCIÓN DE LAS FUNCIONES DE SECRETARIOS DE JUZGADO DE PAZ.

AAC, CARPETA DEL JUZGADO

*1.Sello registro de entrada Ayuntamiento de Camporrells con la fecha en la que entro el docuemnto.*

*2.Encabezado institucional ASFHAN.*

*3.Sello insitucional ASFHAN, junto con firma del secretario general de ASFHAN en Aragón.*

[1.Sello registro de entrada]

[2.Ecabezado institucional]

Estimado Compañero.:

Con estas lineas te acompaño el texto integro del acuerdo que el Comité Regional, y sobre el tema de la HUELGA de los Juzgados de paz, tomo el pasdo dia 11 de enero, en virtud de lo planteado en la Asamblea celebrada el día 10 de Novimiembre en Zaragoza y donde se indico la oportunidad de revisar la convocatoria de Huelga en el mes de enero de 1.991.

“Esta Asociacion Sindical, convocante de la Huelga que desde el 28 de diciembre de 1.989 lleva protagonizando el colectivo de Secretarios -Interventores de los Ayuntamientos aragoneses de menos de 5.000 habitantes, en protessta por el deber de asuncion de las funciones de Secretarios de Juzgados de Paz, impuesto por la Ley de Demarcación y Planta Judicial, por el presente deocumento quiere dejar constancia de los siguientes extremos:

**PRIMERO.**-Que teniendo conocimiento de la apertura de conversaciones, entre la Diputacion General de Aragon y el Ministerio de Justicia, a fin de llevar a efecto el Mapa de Agrupaciones Secretariales para el mantenimiento de las Secretarias de Juzgado de Paz de Aragón, medida reivindicada por esta Asociacion, lo que conlleva el relevo en las funciones de Secretarios de Juzgados de Paz a los de Ayuntamiento, en un lazo mas o menos breve de tiempo.

**SEGUNDO.-** Que siendo conscientes de la necesidad que en estos momentos tiene la poblacion aragonesa afectada por la Huelga, de que se cree un servicio que en ningun momento debiera faltar en todas las localidades, como es la Justicia llevada por especialistas del Derecho Procesal para hacer efectivo- lo proclamado en la Constitucion Española sobre la igualdad de los ciudadanos, autentico soporte de un Edstado que se denomina de Derecho.

**TERCERO.-** Que queriendo dar muestras de nuestra buena voluntad, a la hora de negociar sin presiones externas a las conversaciones que ahora se inician y por otra parte desbloquear una situación que perjudicaba principalmente a los ciudadanos de los que como Funcionarios Publicos servimos.

**CUARTO.-** Que habiendo demostrado ser un colectivo no solamente preocupado por nuestros problemas y lso de la sociedad aragonesa, sino que tambien sabemos estar unidos a la hora de afrontar medidas tendentes a la busqueda de soluciones.

Hoy día 11 de enero de 1.991, habiendose reunido el Comité Regional de la Asociacion Sindical.

HA APROBADO:

**PRIMERO.-** Emplazar a la Administracion, tanto Autnomica como Central, para que antes del **1 de marzo de 1.991**, se nos comunique fehacientemente los progresos en las conversaciones, y se especifique plazo concreto para el funcionamiento de las Agrupaciones Secretariales.

**SEGUNDO.-** Que llegada tal fecha sin que se cumplan los requisitos antes explicados, nos reservamos el derecho de tomar cualquier **medida de presion** , se carácter sindical encaminada a la consecucion de nuestros planteamientos, **no cerrando la pruerta a ninguna medida**, incluidas las que se pudieran tomar en torno al proceso electoral

**TERCERO.-** Como prueba de buena voluntad, y para no presionar en las negociaciones ahora iniciadas, **DESCONVOCAR LA HUELGA**, con fecha de 18 de enero de 1.991, que se venia manteniendo desde el 28 de Diciembre de 1.989, y que afectaba a las funiones de Secretarios de Juzgado de Paz.

**CUARTO.-** Hacer publico el agradecimiento a cuantas personas y organizaciones vienen demostrando apoyo durante el Conflicto, haciendo especial mencion a los MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL ARAGONESES”

Por otra parte, queremos comentarte los datos qu etneemos sobre el borrador de Decreto que tan preocupados nos mantenía el pasado Noviembre.

Siguiendo con lo acordado por la Asamblea de Zaragoza, miembros de la Ejecutiva del Sindicato nos trasladamos a Valladolid , el día 2 de Diciembre, para tratar con los compañeros de Castilla-Leon la problemática del ya famoso Decreto. Allí se nos confirmo la noticia, comentada ya en la Asamblea de Zaragoza, de la retirada por parte del Ministerio del citado texto, y debido principalmente por las presiones de la Caomunidades Autonomas, y no como otras afirmaciones hacen llegar, gracias a ninguna gestion del Colegio Nacional de Secreterios.

Mas bien “gracias” a este Colegio, hubiesemos tenido otro Decreto, practicamente el mismo, que se habia tenido a bien negociar con la Directora General, sin consultar con los Colegios Provinciales. (Dicho borrador lo tenemos en nuestro poder por si alguien quiere comprobar la veracidad de lo dicho).De tal modo era el texto del Colegio , que la Asamblea de Castilla-León ( son 900 compañeros),por mayoria absoluta acordó REPROBAR AL COLEGIO NACIONAL, una vez escuchadas las explicaciones de dos vocales nacionales, presentes en el acto

Otra de las consecuencias alli extraidas, ha sido el interes mostrado por varios compañeros de esa Comunidad Autonoma, para constituir una Asociacion Sindical semejante a la nuestra, y proceder a constituir mas tarde la Federacion a nivel nacional, que seria la encargada de contactar con las administraciones a este nivel y propoundria las medidas a tomar, de carácter sindical, en el caso de que fues necesario, para defender nuestro derecho.

Por ultimo comentaros que aun siendo optimistas cono las negociaciones entre la D.G.A y el Ministerio de Justicia, puesto que conocemos la existencia de un proyecto de ley de Reforma Parcial de la Ley De Planta y Demarcacion Judicial, y la voluntad del Ministerio de tomar una solucion global para las CC.AA de Aragn, Castilla -León y Navarra, no dudaremos en poner en practica cualquier medida de presión a nuestro alcance, sino se llega a ninguna conclusion antes de la fecha señalada.

Sin otro particular.

En Zaragoza a 14 de enero de 1.991.

[3.Sello institucional]

## ANEXO DOCUMENTAL Nº 9.

Abreviaturas empleadas:

AAC = Archivo del Ayuntamiento de Cmporrells (Huesca).

TSJA = Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

9

Camporrells, 7 de enero de 1.992

NOTIFICACIÓN DEL TSJ DE ARAGÓN, DE LA RESOLUCIÓN ADOPTADA ANTE LA PROBLEMÁTICA DERIVADA DE LA HUELGA DE LOS SECRETARIOS-INTERVENTORES POR LA ASUNCIÓN DE TAREAS DE LOS JUZGADOS DE PAZ.

AAC,CARPETA JUZGADO

*1.Encabezado Institucional TSJA.*

*2. Sello registro de salida del TSJA , numero 2675.*

*3.Sello registro de entrada en el Ayuntamiento de Camporrells, numero 1.*

*4.Sello institucional de la presidencia del TSJA, junto con la firma del presidente.*

[1.Encabezado institucional]

[2.Sello registro salida]

[3.Sello registro entrada]

La sala de Gobierno, en su sesion del 29 de noviembre del correinte año, examinó los problemas que se derivan de la entrada en vigor de la Orden de 28 de junio de 1991 por la que se determinan las plantillas de las Agrupaciones de las Secretarias de Juzgados de Paz en la Comunidad Autónoma de Aragón, en relación con las previsiones que tanto la Ley Orgánica del poder Judicial como la Ley 38/1988 de 28 de diciembre de Demarcación y Planta Judicial, contemplan este mismo orden.

Después de una amplia deliberación ha llegado la repetida Sala de Gobierno a las siguientes conclusiones que considera deben ser tenidas presentes tanto por los Sres. Jueces de Paz como por los Sres. Secretarios de los Juzgados de esta entidad, que actualmente presentan sus servicios en las mismas, cualquiera que sea la procedencia de su actuación.

Considera la Sala de Gobierno que a partir del día 1 de noviembre de 1991, en la que según la disposición final de aquella Orden comenzaria a regir y desplegar sus efectos, no puede entrar plenamente en ejercicio por cuanto es precisa una progresiva integración de la norma según se vayan cumpliendo tdas las exigencias incluidas en los artículos 1º,2º y 2º de dicha Norma Legal.

Por todo lo anterior, deberan cumplirse, y tenerse muy en cuenta, las siguientes disposiciones:

1. Los Juzgados de Paz, incluso cuando funcionan plenamente las Agrupaciones de Secretarías, siguen teniendo las mismas competencias y atribuciones que las descritas en el art. 100 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Con ello se quiere significar que son los Jueces de Paz, quienes dictan las providencias, resoluciones, etc.. que procedan en cada uno de los asuntos cuyo conocimiento les viene atribuido y, además quienes vienen llamados a ejecutarlo( art.117.3 de la Constitución, art. 2º.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

También significa que los Registros Civiles siguen encuadrados, localizados y situados en los locales destinados a Juzgados de Paz, sin que quepa trasladarlos a lugar o población diferente; siendo la sede la localidad donde radique el Juzgado reespectivo, el idoneo para practicar todas las anotaciones que deben inscribirse en dichos Registros Civiles.

2. Hasta que no sean nombrados oficialmente por el Ministerio de Justicia los Oficiales y Agentes Judiciales que deban servir como titulares las respectivas Agrupaciones de Secretarías, los funcionarios que hasta la fecha venían desempeñando las funciones de dar fe y autorizar los Actos Judiciales, deberán continuar ejerciendo tales funciones sin que quepa ninguna posibilidad legal de remitir documentos o trasladar actividades a los centros de trabajo a los que se refiere el art. 2º.2 de la Orden 28-6-91.
3. Aún en el supuesto de que efectivamente existan Oficiales y Agentes Judiciales, oficialmente nombrados por el Ministerio de Justicia, de modo que queden satisfechas las exigencias prevenidas en los arts. 1 y 2 de la tan repetida Orden, hasta que por el Ministerio de Justicia no se aprueben los planes de actividades y los económicos, a los que se hace mención en el art 3º del mismo Campo Legal, tampoco podría funcionar plenamente la Agrupación de Secretarías, al faltarle uno de los elementos integradores de la Norma descrita.

Espera la Sala de Gobierno, que los anteriores acuerdos y disposiciones sean correctamente entendidos y cumplidos tanto por los Sres. Jueces de Paz como por los Sres. Secretarios que desempeñan sus funciones en dichos Juzgados, por cuanto, de no observarse estos y tratando de interpretar la Orden de 28 de Junio de 1991 en un sentido rigurosamente literal se llega a un vacío jurisdiccional imposible de ser completado de ningún modo, lo cual resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución que otorga a todos los Españoles el derecho al otorgamiento de la tutela judicial **efectiva**.

Lo que traslado a V.D., a los oportunos efectos de su conocimiento y cumplimientos debidos.

Zaragoza a 3 de diciembre de 1991.

**EL PRESIDENTE. Fdo. José R San Román Moreno.**

[4.Sello institucional]



## ANEXO DOCUMENTAL Nº 10.

Abreviaturas empleadas:

AATL = Archivo del Ayuntamiento de Tamarite de Litera (Huesca).

10

Tamarite, 10 de noviembre de 1985.

MEMORIA DIRIGIDA AL SR. MINISTRO EN LA QUE SE DETALLAN EXACTAMENTE LAS RAZONES ESGRIMIDAS PARA QUE EL JUZGADO DE DISTRITO DE TAMARITE SE TRANSFORME EN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA.

AATL, EXPEDIENTE DOSIER SOBRE EL JUZGADO: REIVINDICACION DE JUGZADO DE DISTRITO DE TAMARITE DE LITERA EN JUZGADO DE 1ª INSTANCIA. DOCUMENTACION DE LOS 14 MUNICIPIOS QUE FORMAN LA COMARCA [Signatura 767/6].

- 1.Encabezado Institucional del Ayuntamiento de Tamarite de Litera..*
- 2.Sello insitucional Ayuntamiento de Tamarite de Litera, junto con la firma del alcalde.*
- 3.Los documentos adjuntos, algunos no fueron encontrados y otros serán analizados de forma individual.*

### [1. Encabezado institucional]

Es un grave problema que afecta indudablemente de una manera directa a la identidad de esta Comarca, si se queda sin Administración de Justicia propia.

Hasta la fecha se dispone de un Juzgada de Distrito ubicado en Tamarite de Litera, que tiene su jurisdicción sobre el antiguo partido judicial. Y como ya en el pasado año se rumoreaba sobre su posible desaparición o supresión el Ayuntamiento elevó a la Comunidad Autónoma una petición para que informara favorablemente el escrito dirigido al Sr. Ministro de Justicia en el que se solicitaba su transformación en Juzgado de 1ª Instancia, que por cierto había sido suprimido en el año 1.965, cuando en un solo Decreto el Gobierno hizo desaparecer cerca de 200 en toda España.

En el dossier que se acompaña va como DOCUMENTO NUMERO UNO- la petición de la Diputación General de Aragón y como NUMERO DOS el escrito dirigido al Sr. Ministro.

Se tenía proyectado que se encargara de realizar todas las gestiones frente a la Administración el Ente que representara a toda la Comarca de la Litera, es decir la Mancomunidad Intermunicipal de La Litera, constituida por representantes de los 14 --- Ayuntamientos de la misma. Desgraciadamente no ha podido ser por los largos tramites que ha requerido la elaboración de los Estatutos, y también porque la nueva Ley de las Bases del Régimen Local hizo variar la trayectoria que se seguía para ultimar la documentación. De todos modos, se está ahora en la recta final, es decir pendiente únicamente de la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón. Una vez aprobada se – procederá a la constitución de la Junta de Gobierno, que será la que se encargue de presionar donde proceda para logra que la Litera siga

teniendo una Administración de Justicia propia.

A pesar de los escritos antes citados y presentados en la Diputación General de Aragón, esta hizo caso omiso de los mismos según resultaba del artículo publicado en el *lIeraldo de Aragón* – el 6 de septiembre último en el que se indicaba que el Ente Autonómico había propuesto al Ministerio de Justicia por lo que se refiere a la provincia de Huesca que se crearan dos juzgados de 1ª Instancia en la capital, otro en Monzón y otro más en Benabarre y que se suprimieran los Juzgados de Distrito de Sariñena y Tamarite cabeceras ambos de comarcas muy definidas y con una identidad acusada.

Lógicamente la noticia cayó como una bomba en la comarca y así una vez pasadas las fiestas de Binéfar se reunieron en esta población los Alcaldes de los catorce municipios que comprende la comarca acordando remitir al Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón y al Sr. Ministro de justicia sendos escritos firmados por todos ellos, pidiéndoles que reconsideraran la propuesta y que cumpliendo con el espíritu y el mandato de la Ley del Poder Judicial transformen el actual juzgado de Distrito de Tamarite en juzgado de 1ª Instancia e Instrucción.

El escrito dirigido a la Diputación General de Aragón se entregó personalmente al Consejero de Presidencia Don Andrés Cuartero Moreno por una Comisión integrada por el alcalde socialista de Binéfar, el independiente de Peralta, el regionalista de Tamarite y una concejala del Grupo Popular de Albelda. No habiendo podido acompañarlos el concejal comunista de Alcámpel y diputado en las Cortes de Aragón Sixto Agudo porque se hallaba en aquel momento reunido y excusó su asistencia.

Con ello se intentó demostrar que todos los Grupos políticos apoyaban y estaban de acuerdo con la petición.

En el dossier se adjunta fotocopia del escrito señalada como DOCUMENTO NUMERO TRES.

Y como DOCUMENTO NUMERO CUATRO, se adjunta fotocopia de las páginas del B.O del Estado que transcriben la parte de la Ley del Poder Judicial referida directa o indirectamente a los Juzgados de 1ª Instancia, para que se pueda comprobar que en el Apartado V de la Exposición de Motivos se expresa de una forma clara que los JUZGADOS DE DISTRITO SE TRANSFORMAN EN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA.

El escrito firmado por los Alcaldes ha sido posteriormente ratificado por los respectivos Ayuntamientos al reunirse en sesiones ordinarias. Y certificaciones de tales acuerdos que se han remitido al Sr. presidente de la Diputación General de Aragón, acompañadas de un escrito firmado por el alcalde de Tamarite en su doble condición de alcalde y presidente de la Asamblea de todos los concejales de la Comarca que elaboro los Estatutos de la Mancomunidad, en el que se intenta convencerles, de que no solamente debe remitir al Ministerio esos acuerdos y peticiones, sino que tendría que asumirlo, si tenemos en cuenta que el art.º. 32 del Estatuto de Autonomía de Aragón dice en su párrafo b) que la Comunidad Autónoma “fijara los límites de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales de Aragón, localizando su capitalidad”.

En el dossier se ven fotocopias de todas esas certificaciones como DOCUMENTOS ACOMPAÑADOS NUMEROS CINCO AL DIECIOCHO y del escrito que las acompañaba SEÑALADO CON EL NUMERO DIECINUEVE.

El Sr. Consejero de Presidencia arguyó de que por existir poco trabajo no se creaba el juzgado de 1ª Instancia en Tamarite, por lo que se solicitó certificación de los asuntos presentados en 1.984 y 1.985, resultando que en este año se han doblado los asuntos civiles, pasando incluso a los de Monzón y Fraga. Todo ello porque hasta primeros de año no estuvo servida la plaza de Juez, ya que últimamente desempeñaba la

plaza un Juez de Zaragoza viniendo una vez al mes.

Se acompañan fotocopias de las dos certificaciones NUEMROS VEINTE Y VEINTIUNO.

Es lamentable la situación en que quedaría la Comarca de La Litera desmembrada o partida en tres, pes según referencia unos municipios pasarían a depender de Monzón, otros de Fraga y otros de Benabarre, sin tener en cuenta para nada sus decisiones y convirtiendo por tanto la autonomía Local en una expresión sin contenido alguno.

Dándose además la paradoja de que la Diputación General de Aragón está contemplando en todos sus estudios a esta comarca como Ente propio y perfectamente definido y así tanto en la publicación “ARAGON EN CIFRAS “del Servicio de Documentación de Economía Aragonesa como en el Programa Económico para Aragón, va la Litera con el número seis de las Comarcas aragonesas. Como DOCUMENTO NUMERO VEINTIDOS se unen al dossier fotocopias de las páginas de la primera publicación referidas a La Litera.

Comarca que como más arriba se indica ha sido confirmada por los propios 14 municipios que la integran, al constituirse e Mancomunidad Intermunicipal. Y también al crear el Servicio Social de Base.

El escrito firmado por los 14 alcaldes y dirigido al Sr. Ministro de Justicia, fotocopia del cual se acompaña también como DOCUMENTO UNIDO NUMERO VEINTITRES Sera remitido en breve plazo a su destino acompañado de las certificaciones de los acuerdos adoptados por los 14 ayuntamientos en los que se ratificó la petición.

Según se deduce el último párrafo del apartado V de la Exposición de Motivos de la referida Ley del Poder Judicial, el Gobierno se ha comprometido a remitirá a las Cortes Generales en el plazo de un año la LEY DE PLANTA Y DEMARCACION JUDICIAL.

Por tanto, es muy importante el lograr convencer a los responsables del Ministerio de Justicia para que acepten la petición de la Comarca de la Litera y en su consecuencia influyan en transformar el proyecto de Ley de Planta y Demarcación Judicial la transformación del Juzgado de Distrito de Tamarite de Litera en Jugado de 1ª Instancia e Instrucción.

Tamarite de Litera, 10 de noviembre de 1.985.

Firma el alcalde

[2.Sello institucional]

## ANEXO DOCUMENTAL Nº 11.

Abreviaturas empleadas:

AAYL = Archivo Ayuntamiento Tamarite de Litera.

DGA = Diputación General de Aragón

11

Tamarite, 12 de julio de 1989

RESPUESTA DE LA DGA ANTE LAS PETICIONES REALIZADAS POR LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE LA LITERA, PARA QUE EL JUZGADO DE TAMARITE DE LITERA SE TRANSFORMARA EN UNO DE PRIMERA INSTANCIA.

AATL, EXPEDIENTE SOBRE REIVINDICACION DE JUZGADO DE DISTRITO DE TAMARITE DE LITERA EN JUZGADO DE 1ª INSTANCIA. DOCUMENTACION DE LOS 14 MUNICIPIOS QUE FORMAN LA COMARCA Y FIRMAS RECOGIDAS. [Signatura 787/7]

*1. Sello de registro de entrada del Ayuntamiento de Tamarite de Litera, con número 1276.*

*2. Encabezado institucional DGA.*

*3. Sello institucional junto con la firma de Ana Maria Cortes Navarro, secretaria del Consejo de Gobierno de la DGA.*

[1. Sello registro de entrada.]

El consejero de Presidencia  
y Relaciones institucionales.

D. Florencio Nadal Escalona  
Alcalde-presidente del Ayuntamiento de  
TAMARITE DE LITERA (Huesca).

Zaragoza, 7 de julio de 1989.

Querido amigo:

Para tu conocimiento adjunto copia de la certificación el Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Diputación General en su reunión del día 4 de Julio de 1989, referente a la conversión del Juzgado de Distrito de Tamarite de Litera, en Juzgado de Primera instancia e Instrucción o en su caso, de Paz, con arreglo a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Aragón y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Un cordial saludo,  
Fdo. José Ángel Biel Rivera.

### I.Competencia de la Diputación General de Aragón para convertir los actuales Juzgados de Distrito en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

Según el art. 32 del Estatuto de Autonomía de Aragón, “en relación con la Administración de Justicia, corresponde a la comunidad autónoma:

a) Ejercer todas las facultades que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado”.

El precepto es tan claro que su interpretación no plantea dificultad alguna: todas las atribuciones o facultades que según las leyes orgánicas del Poder Judicial correspondan, in genere, al Gobierno Central, han de ser ejercitadas, en el territorio aragonés, por la Comunidad Autónoma de Aragón.

Recuerda tal atribución de competencias, es de tener en cuenta que la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial, d 1 de julio de 1985, ordena, en su Disposición Transitoria Tercera, que: “El Gobierno, dentro del año siguiente a la promulgación de la Ley de Demarcación, oído el Consejo General del Poder Judicial, efectuará la conversión de las actuales Juzgados de Distrito en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, o, en su caso, de paz”, con arreglo a las reglas que tal Disposición contiene.

La Facultad que dicha Disposición atribuyo al Gobierno central, en recta aplicación de lo dispuesto en el art. 32-a del Estatuto de Autonomía de Aragón, debe entenderse conferida al Gobierno de la Diputación General de Aragón. En consecuencia, la conversión de los Juzgados de Distrito existente en territorio aragonés en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción o en Juzgados de Paz, deberá llevarse a cabo dentro del plazo de un año antes citado, no por el Gobierno central sino por el de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La Ley de Demarcación y de Planta Judicial es de fecha de 28 de diciembre de 1986, siendo publicada el 30 del mismo mes. En consecuencia, el plazo para la conversión de los actuales Juzgados de distrito, termino el 31 de diciembre de 1989. Tal conclusión queda ratificada a la vista de lo dispuesto en el art. 42-2) de la Ley de Demarcación que reitera el momento previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La transformación de tales Juzgados, al estar atribuida al Gobierno, deberá hacerse por Real Decreto. Por lo que afecta a los Juzgados de Distrito existentes en territorio aragonés, tal conversión deberá llevarse a cabo en virtud de Decreto de la Diputación General de Aragón que, previamente, habrá de oír al Consejo General del Poder Judicial.

### **II.-El supuesto de los Juzgados de Distrito de Tamarite de Litera y de Monzón.**

La Ley de Demarcación de 28 de diciembre de 1988, al concretar la división judicial de todo el territorio español, por lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de Aragón y, específicamente, a la Provincia de Huesca configura seis partidos Judiciales. En el sexto de ellos y entre las poblaciones que lo integran figuran dos localidades, Tamarite de Litera y Monzón, que en la actualidad, cuentan ambos con Juzgado de Distrito, sin que en todo el territorio de dicho Partido existía ninguna con Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.

Por lo tanto, en el Partido Judicial 6 de la Provincia de Huesca existen en este momento dos cuestiones por resolver:

1º) Fijación de la capitalidad.

2º) Qué conversión se produce en los Juzgados de Distrito de Tamarite de Litera y de Monzón.

a). En relación con la primera de las cuestiones apuntadas, es de destacar que, según el art. 32-b) del Estatuto de Autonomía de Aragón, corresponde a la Comunidad Autónoma fijar la capitalidad de las demarcaciones judiciales. En este mismo sentido, el art. 35-6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que “las Comunidades Autónomas determinaran, por ley, la capitalidad de los partidos judiciales”.

En consecuencia, corresponde a las Cortes de Aragón la aprobación de la ley que fije la capitalidad de todos los Partidos Judiciales en que se divide Aragón.

Por lo que afecta al partido judicial nº 6 de la Provincia de Huesca, lo normal será que en su capitalidad se fije en Tamarite de Litera o en Monzón, por ser las únicas poblaciones que en su territorio ya cuentan con infraestructura jurisdiccional. Es de resaltar, además, que Tamarite de Litera ha sido, desde el siglo pasado, capital de su partido.

La localidad que tenga la capitalidad, automáticamente contara con Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.

b). Respecto a la segunda de las cuestiones, la Diputación General de Aragón, antes del 31 de diciembre de 1989, deberá decidir, respecto a la población que no sea declarada capital del Partido y que cuenta con Juzgado de Distrito, si se transforma en Juzgado de Primera Instancia e instrucción o de Paz, tal como prevé la Regla 5º de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

A nuestro juicio, la transformación debe hacerse en juzgado de primera Instancia e instrucción. La extensión del Partido Judicial nº6 de la provincia de Huesca, las sustanciales diferencias existentes entre las comarcas de La Litera y de Monzón, el reparto de sus respectivas poblaciones, las especiales características de la primera de ellas, lindante con Cataluña y los condicionamientos históricos, aconsejan, por no decir obligan, a que tanto Tamarite de Litera como Monzón cuenten con Juzgado de Primera Instancia, con independencia de que la capital sea fijada en una de ellas.

[2.Encabezado institucional]

ANA MARIA CORTES NAVARRO, SECRETARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON.

C E R T I F I C O: Que el Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón, en su reunión del día 4 de julio de 1989, se adoptó entre otros un acuerdo que copiado literalmente dice lo siguiente:

“Se aprueba el ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EL TRAMITE PREVISTO EN LA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL, A EFECTOS DE LA CONVERSION DE DETRMINADOS JUZGADOS DE DISTRITO EN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN. Dispone la Disposición Tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985 en su

apartado 1) que: “El Gobierno, dentro del año siguiente a la promulgación de la Ley de Demarcación, oído el Consejo General del Poder Judicial, efectuara la conversión de los actuales juzgados de Distrito en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, o, en su caso, de Paz . . . “con arreglo a las reglas que en dicha Disposición se contienen. La Ley de Demarcación y de planta Judicial, de 28 de diciembre de 1988, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado de 30 de diciembre de 1988. Consecuentemente, el 30 de diciembre de 1989 concluye el plazo de un año al que se refiere la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial. A su vez, el art. 42-2) de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial reitera que “en el plazo de un año, a partir de la fecha de promulgación de la presente Ley, el Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial, efectuara la conversión de los actuales Juzgados de Distrito en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, o en su caso, de Paz, con arreglo a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial”. Respecto a la cuestión contemplada en los preceptores antedichos, es de tener en cuenta que el Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica de 10 de agosto de 1982, ordena en su art. 32, uno, “En relación con la Administración de Justicia, exceptuando la militar, corresponde a la Comunidad Autónoma: a) Ejercer todas las facultades que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado”. En consecuencia, la facultad de conversión de los actuales Juzgados de Distrito que la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye al Gobierno, corresponde en el concreto supuesto de los existentes en el territorio de Aragón a su Comunidad Autónoma, por expreso imperativo del art. 32 de su Estatuto de autonomía, que, en recta aplicación de los preceptos citados debe oír, previamente al Consejo General del Poder Judicial. En virtud de cuanto antecede, a propuesta del consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, el Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón, previa deliberación, en su reunión del día 4 de julio de 1989 A C U E R D A: Oír al Consejo General del Poder Judicial a los efectos previstos en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley orgánica del Poder judicial de 1 de diciembre de 1985, art. 42-2) de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y art. 32, uno, a) del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica de 10 de agosto de 1982, sobre la conversión de los actuales juzgados de Distrito existentes en el territorio de Aragón, en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, con especial consideración a la transformación en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de los actuales Juzgados de Distrito de Tamarite de Litera y Monzón ( Huesca).”

Y para que así conste y su remisión A EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL a fin de que surta los efectos oportunos, expido la presente certificación en Zaragoza y en la sede de la Diputación General de Aragón a cinco de Julio de mil novecientos ochenta y nueve

LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.

[3.Sello institucional]

1. fe y autorizar los Actos Judiciales , deberán continuar ejerciendo tales funciones sin que qupa ninguna posibilidad legal de remitir documentos o trasladar actividades a los centros de trabajo a los que se refiere el art. 2º.2 de la Orden 28-6-91.

2. Aún en el supuesto de que efectivamente existan Oficiales y Agentes Judiciales, oficialmente nombrados por el Ministerio de Justicia, de modo que queden satisfechas las exigencias prevenidas en los arts. 1 y 2 de la tan repetida Orden, hasta que por el Ministerio de Justicia no se aprueben los planes de actividades y los económicos, a los que se hace mención en el art 3º del mismo Campo Legal, tampoco podría funcionar plenamente la Agrupación de Secretarías, al faltarle uno de los elementos integradores de la Norma descrita.

Espera la Sala de Gobierno, que los anteriores acuerdos y disposiciones sean correctamente entendidos y cumplidos tanto por los Sres. Jueces de Paz como por los Sres. Secretarios que desempeñan sus funciones en dichos Juzgados, por cuanto, de no observarse estos y tratando de interpretar la Orden de 28 de Junio de 1991 en un sentido rigurosamente literal se llega a un vacío jurisdiccional imposible de ser completado de ningún modo, lo cual resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución que otorga a todos los Españoles el derecho al otorgamiento de la tutela judicial **efectiva**.

Lo que traslado a V.D., a los oportunos efectos de su conocimiento y cumplimientos debidos.

Zaragoza a 3 de diciembre de 1991.

**EL PRESIDENTE. Fdo. José R San Román Moreno.**

[4.Sello institucional]



## ANEXO DOCUMENTAL N° 12.

Abreviaturas empleadas:

AATL = Archivo del Ayuntamiento de Tamarite de Litera (Huesca).

12

Tamarite , 1 de febrero de 1996.

RESPUESTA DEL JUSTICIA DE ARAGÓN, ANTE LAS PETICIONES DE LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE LA LITERA PARA QUE EL JUZGADO DE TAMARITE DE LITERA SE CONVIRTIERA EN UN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA.

AATL, EXPEDIENTE SOBRE REIVINDICACION DE JUZGADO DE DISTRITO DE TAMARITE DE LITERA EN JUZGADO DE 1ª INSTANCIA. DOCUMENTACION E LOS 14 MUNICIPIOS QUE FORMAN LA COMARCA. [Signatura 787/7].

1. Encabezado Institucional del Justicia de Aragón.
2. Sello registro de entrada del Ayuntamiento de Tamarite de Litera, con fecha de 1 enero 1996 y número 282.
3. Sello registro de salida del Justicia de Aragón, en fecha 3 de enero de 1996 y numero 526.
4. Sello institucional del Junticia de Aragon , junto con la firma de Juan Bautista Monserrat Mestanza.
5. Pie de página en el que figura la siguiente información: San Jorge, 10,1º · Teléfono (976) 399 354 · Fax 39 46 32 · 50001 ZARAGOZA.

[1. Encabezado institucional]

[2. Sello registro entrada  
salida]

[3. Sello registro

Expte. DI-1006/1995-8

AYUNTAMIENTO DE  
TAMARITE DE LITERA  
Plza. España 1  
22550. TAMARITE DE LITERA  
25 de Enero de 1996.

Estimado señor:

El pasado 15 de diciembre de 1995 se recibió en esta Institución escrito de queja presentado por Ud. Al que se le asigno la referencia arriba indicada como ya se le comunico en nuestro acuse de recibo.

Una vez estudiado el contenido de su queja, compruebo que la misma se refiere a

una materia excluida de la supervisión de esa institución por no estar referida directamente a las competencias de la comunidad Autónoma de Aragón.

Las competencias que como Justicia de Aragón tengo, me vienen determinadas por la Ley de las Cortes de Aragón 4/1985, de 27 de Junio, concretándose en la facultad de supervisar el funcionamiento de los organismos administrativos que dependen directamente del Gobierno Aragonés, quedando excluidos de mis facultades de supervisión los organismos que siguen dependiendo del Gobierno Central, como es el caso de la Administración de justicia , y en concreto, lo referido a la demarcación y planta judicial.

No obstante, acogiéndome a las facultades que me confiere la legislación vigente y tratando con ello de facilitarle alguna solución a su problema, he acordado y admitir la queja a medición con la finalidad de remitirla al Defensor del Pueblo que, si tiene competencias en esta materia, con mi ruego de que atienda su queja y haga cuanto este en su mano para darle una solución justa.

La oficina del Defensor del Pueblo se pondrá en contacto directo con Ud. No obstante, lo cual le agradeceremos que nos mantenga informados de la atención que recibe y asimismo quedamos a su disposición para hacer llegar a dicha institución cualquier documentación que le sea requerida.

En cualquier caso, le comunico que esta institución se hace eco de sus reivindicaciones en la orden a la creación de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en el partido judicial de Monzón, que tenga su sede en el municipio de Tamarite de Litera, lo que hare consta en mi informe Anual a la Cortes de Aragón, para conocimiento de los Diputados y a los efectos públicamente oportunos.

Agradeciéndole en cualquier caso la confianza depositada en esta Institución al remitirnos su problema, aprovecho la ocasión para transmitirle mi más cordial saludo.

Afectuosamente.

Fdo. Juan Bautista Monserrat Mestanza.  
JUSTICIA DE ARAGON  
[4.Sello institucional]

[5.Pie de página]

### ANEXO DOCUMENTAL Nº 13.

Abreviaturas empleadas:

AATL = Archivo del Ayuntamiento de Tamarite de Litera (Huesca).

13

Tamarite, 24 de junio de 1996

RESPUESTA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, ANTE LA REMISIÓN POR PARTE DEL JUSTICIA DE ARAGÓN DE LAS PETICIONES DE LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE LA LITERA PARA QUE EL JUZGADO DE TAMARITE DE LITERA SE CONVIRTIERA EN UN JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA.

AATL, EXPEDIENTE SOBRE REIVINDICACION DE JUZGADO DE DISTRITO DE TAMARITE DE LITERA EN JUZGADO DE 1ª INSTANCIA. DOCUMENTACION E LOS 14 MUNICIPIOS QUE FORMAN LA COMARCA. [Signatura 787/7].

*1. Encabezado Institucional del Defensor del Pueblo.*

*2. Sello registro de salida del Defensor del Pueblo, con fecha 13 de junio de 1996 y número 033105*

*3. Sello registro de entrada en el Ayuntamiento de Tamarite de Litera con fecha de 24 de junio de 1996 y número 1629.*

[1. Encabezado institucional]

[2. Sello registro entrada]  
registro salida]

[3. Sello

Expediente: Q9600893.  
Área: 3/TGL

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL  
AYUNTAMIENTO DE  
TAMARITE DE LITERA  
PLAZA DE ESPAÑA 1  
22550 TAMARITE DE LITERA  
HUESCA

SEÑORÍA:

En relación con su queja, registrada en esta institución con el número de referencia que arriba se indica, cúpleme notificarle que se ha recibido del Excmo. Sr. Fiscal General del Estado el informe que preceptúa el art. 13 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, por la que nos regimos.

En dicho informe sustancialmente se manifiesta:

“... El Partido Judicial de Monzón cuenta con una Planta prevista en la Ley 1/1988, de

28 de diciembre de Demarcación y Planta Judicial, de un único Juzgado de Primera Instancia E instrucción, procedente de la reconversión del antiguo Juzgado de Distrito, con efectividad desde el 28 de diciembre de 1989.

De acuerdo con los datos estadísticos recogidos en la última Memoria del Consejo General del Poder Judicial correspondiente a 1994 , las cargas de trabajo que soporta dicho Juzgado, aunque no son idóneas, si son asumibles teniendo en cuenta los módulos establecidos por el Consejo, ya que, si bien el número de asuntos tramitados en el orden civil es muy elevado ( 522 asuntos anuales), en el orden penal son bastante inferiores ( 1.270 diligencias previas), lo que le sitúa en unos porcentajes del 143,3% y 96,5%, respectivamente, en relación con la media nacional.

En consecuencia, teniendo en cuenta estos datos y que el Consejo General del Poder Judicial en relación de circunstanciada de necesidades de la Administración de Justicia para el año 1996, recoge la propuesta de la creación de un segundo Juzgado en el Partido Judicial de Monzón, y , además, las peticiones formuladas en este mismo sentido por el Ayuntamiento de esta localidad y por el Gobierno Civil de Huesca, en la programación a medio plazo de la Secretaría de Estado de Justicia figura dicha creación.

No obstante, la materialización de la creación de este segundo Juzgado se encuentra supeditada a la evolución de las cargas de trabajo del Juzgado existente, ya que con las actuales la creación de otro Juzgado supondría la existencia de dos Juzgados infrautilizados, así como a las disponibilidades prestatarias y a las restantes necesidades de nuevos Órganos Judiciales, por lo que en estos momentos no es posible realizar una previsión temporal concreta en este asunto ...”

En consecuencia, y agradeciendo a S.S. la confianza que nos ha demostrado, damos por finalizadas las investigaciones iniciadas al efecto en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 31 de la Ley Orgánica citada.

Saluda atentamente a S.S.,

Fernando Álvarez de Miranda y Torres.